

Los pobres en papel

**Las narrativas de
la pobreza en la prensa
latinoamericana**

Los pobres en papel

Las narrativas de
la pobreza en la prensa
latinoamericana

Philip Kitzberger / Germán Javier Pérez



Programa Medios de Comunicación
y Democracia en Latinoamérica

Kitzberger, Philip

Los pobres en papel : las narrativas de la pobreza en la prensa latinoamericana / Philip Kitzberger y German Javier Perez. - 1a ed. - Buenos Aires : Konrad Adenauer Stiftung, 2008. 96 p. ; 23x16 cm.

ISBN 978-987-1285-11-2

1. Crónicas Periodísticas. I. Perez, German Javier II. Título
CDD 070.43

© Fundación Konrad Adenauer
*Programa Regional Medios de Comunicación
y Democracia en Latinoamérica*
Suipacha 1175, 2° piso
C1008AAW Buenos Aires
Argentina
Tel.: +54-11-43 93 28 60
www.kasmedios.org

ISBN: 978-987-1285-11-2

Corrección: Jorge Galeano
Diseño de Interior: Ana Uranga B.

Impreso en Argentina
Hecho el depósito que establece la Ley 11.723

Prohibida su reproducción total o parcial, incluyendo fotocopia,
sin la autorización expresa de los editores

Mayo 2008

Índice

Prólogo.....	7
Presentación del estudio	9
Primera parte:	
Eventos, voces y agentes en la cobertura de los medios	11
Los medios como arena pública	11
Terremotos, inundaciones, olas de frío, crimen: eventos que hacen visibles a los pobres	12
¿Qué actores y qué voces construyen el problema de la pobreza en la prensa?	23
Los protagonistas del relato: los agentes en la narrativa mediática de la pobreza	28
Segunda parte:	
Los tópicos y los debates sobre la pobreza	33
“El modelo chileno”: la estrategia de mercado en el combate contra la pobreza	34
El fantasma populista: cuestionamientos al uso político de la pobreza	51
Narcotráfico y violencia organizada en el campo y la ciudad: la pobreza como desafío a la soberanía estatal.....	59
“La diplomacia del etanol” y el auge de las exportaciones primarias: ¿Nuevas oportunidades en el combate contra la pobreza?.....	72
Conclusiones: pobreza, medios y democracia	81
Apéndice: con gráficos del estudio	87

Prólogo

En la agenda mediática a los pobres se les reserva el mismo lugar que en la sociedad: quedan al margen, excluidos de las primicias, en su mayoría sin imagen, criminales, afro-descendientes, sufrientes, gente sin conocimiento, sin simpatía, sin “gancho” para dar una buena noticia. ¿Gente demasiado común? Gente que pareciera habernos cansado porque vemos cada día cómo busca en los desechos para sostenerse, porque no logró adquirir una existencia por medio de un trabajo diario.

Lo cierto es que los pobres no sólo no provocan noticias, también se evidencia poca actitud proactiva en las salas de redacción hacia el tema de los pobres. ¿Pueden tener impacto mediático informaciones acerca de la pobreza, en particular cuando se trata de describir sus causas, posibles soluciones y dar lugar a ideas sobre cómo controlar la lucha contra la pobreza? Queda por explorar esta respuesta con creatividad periodística y compromiso social de los medios. Tanto más, cuando los contrastes que muestran las políticas de desarrollo dejan preguntas abiertas y requieren investigaciones.

¿Acaso quizás nos hemos ya acomodado con el hecho de que –si bien los expertos detectan un crecimiento económico promedio de cinco por ciento en la región– la brecha entre ricos y pobres sigue abriéndose?

El tema de la pobreza aparece frecuentemente en los discursos de los políticos, sobre todo durante las campañas electorales. Y después hay poco seguimiento, incluso el tema es dejado de lado en los medios.

El estudio realizado por Global News Group, encargado por el Programa Regional Medios de Comunicación y Democracia de la Fundación Konrad Adenauer, demuestra el poco espacio destinado por los medios a investigar sobre la pobreza. Entre los aspectos importantes analizados se encuentra no sólo el volumen, sino también la forma de cobertura, el perfil de los autores,

así como también el uso de las fuentes. El estudio mostró que tan sólo 0,7 por ciento del material analizado trata sobre la pobreza y de esta cantidad sólo un 20 por ciento aborda este tema de manera directa.

No sólo hay grandes diferencias entre países sino también entre medios de comunicación. México, Brasil y Argentina son los países que más escriben sobre la pobreza en términos cuantitativos. Sin embargo los reportes más multifacéticos en su contenido se encuentran en dos países andinos: Perú y Bolivia. Los medios peruanos analizados tienen mejor información de fondo, mencionan diversas soluciones y causas de la producción y reproducción de la pobreza. Los diarios financieros son los que menos tratan el tema y lo abordan de manera estereotipada y técnica.

Como trasfondo de este estudio estuvo la pregunta de cómo los medios de comunicación -como parte de una élite- asumen su responsabilidad social cuando se trata de describir fenómenos como la pobreza, analizar las causas estructurales de este fenómeno y mostrar salidas a este problema.

El estudio será replicado en 2008 con un doble fin: por un lado, se trata de mejorar la conciencia con respecto a este tema cuya cobertura mediática aún puede ser significativamente mejorada y ampliada. Por el otro, esta investigación se orienta a revitalizar el debate sobre la lucha contra la pobreza, para que el tema no quede reducido a un eslogan de campaña y se centre en conceptos sustentables y orientados a la práctica.

Dra. Karla Sponar

Directora del Programa regional

Medios de Comunicación y Democracia en Latinoamérica /

Fundación Konrad Adenauer

www.kasmedios.org



Presentación del estudio

Este libro se propone describir y analizar las representaciones de la pobreza en los medios gráficos de siete países de Latinoamérica. Hemos tomado como referencia un período de seis meses (abril - septiembre de 2007), durante el cual se realizó un relevamiento de las noticias que hacen referencia a la problemática de la pobreza en los siguientes diarios:

Argentina: *La Nación, Clarín, El Cronista Comercial*

Bolivia: *El Deber, La Razón, Los Tiempos*

Brasil: *O Estado de Sao Paulo, O Globo, Gazeta Mercantil*

Chile: *El Mercurio, La Nación, Estrategia*

México: *Reforma, La Jornada, El Economista*

Perú: *La República, Gestión, El Comercio*

Venezuela: *El Universal, El Nacional, Últimas Noticias*

La investigación consistió en reconstruir las narrativas de la pobreza en los medios de los distintos países, atendiendo a sus relaciones e implicancias regionales. Para ello se utilizaron técnicas cuantitativas y cualitativas.¹

El discurso narrativo provee principios de inteligibilidad de la realidad histórica que organizan la comprensión del pasado y del presente. Lo propio del relato es la posibilidad de ordenar una serie cronológica de eventos en una trama cuyo tema será la configuración de un conjunto de relaciones entre agentes, acciones y acontecimientos. Es así que nuestra experiencia

1 Para mayor desarrollo de la metodología utilizada consultar el Apéndice: metodología y características de la muestra.

del tiempo histórico no se ajusta a la sucesión monótona del calendario, sino que se plasma en una temporalidad narrada, es decir, organizada según quién cuenta, cómo cuenta, qué cuenta y, lo más importante, qué autoriza a contar.

Salvo en circunstancias particulares en las que logra convertirse en noticia, por ejemplo en el contexto de una profunda crisis económica, la pobreza como tal es un problema social que no contiene necesariamente “valor de noticia”. En América Latina siempre ha estado ahí, no es novedosa ni produce gran impacto. De hecho, menos del 1% de las notas publicadas en los diarios relevados tratan sobre la pobreza.

Por lo tanto, su presencia mediática debe ser explicada por la ocurrencia de ciertos hechos o acontecimientos, o por la participación de ciertos agentes que la invocan como problema. Estos eventos noticiables, producidos en forma más o menos rutinaria por determinados actores, ponen en circulación discursos que tematizan, interpretan o interpelan la problemática de la pobreza. A modo de ejemplo, no es un aumento real de la pobreza en un país lo que llega a constituirse en noticia, es, en todo caso, la publicación de nuevos índices estadísticos que reportan un aumento por parte de agentes públicos determinados, las interpretaciones que de tal aumento se realicen, las responsabilidades que se atribuyan, los remedios que se propongan, etc.

Debemos preguntarnos entonces qué hechos, acciones y acontecimientos, rutinarios y no rutinarios, son los que despiertan la atención sobre el tema. También, cuáles son los actores que ponen en circulación tales discursos y qué agentes se representan en ellos. Una vez instalada la discusión sobre la pobreza en los medios, una cosa es evidente: su carácter intolerable dispara una serie de polémicas que relacionan directamente a la pobreza con el dilema político de su erradicación.



Primera parte: eventos, voces y agentes en la cobertura de los medios

Los medios como arena pública

Las profundas mutaciones que ha operado el desarrollo de los medios masivos de comunicación sobre el espacio público contemporáneo generaron novedosas formas de escenificación del conflicto social y, consecuentemente, transformaron las estrategias y las prácticas políticas. La configuración del espacio público institucionalizado y deliberativo que sustentó el imaginario liberal representativo de la democracia moderna, viene cediendo importancia frente a una nueva estructuración de la esfera pública dominada por una forma de interacción mediada que separa a la relación social de la ubicación física, al mismo tiempo que multiplica la producción y difusión de complejas formas simbólicas. Como efecto de este fenómeno asistimos a importantes transformaciones en las formas de integración social de las sociedades contemporáneas; se produce una creciente deslegitimación de los lazos sociales vinculados a la representación política y la representación funcional que constituyen los mecanismos típicos de integración social. El control de los recursos simbólicos –a través de los cuales se aseguran la representación y el liderazgo políticos– se desplaza de las clásicas estructuras institucionales del sistema político –partidos, sindicatos– al espacio de los medios masivos, los que están sujetos a otras reglas de producción, circulación y reconocimiento de los mensajes. Es por eso que hoy, quizá más que nunca, un estudio sobre medios constituye una compleja indagación sobre un escenario donde se traman las disputas políticas y se representan distintos imaginarios sociales.

Desde una perspectiva sociológica los medios de comunicación deben ser considerados al mismo tiempo como vehículos y agentes en la circulación de la información, sometidos a ciertas reglas de juego impuestas por las expectativas que genera la comunicación a nivel nacional e internacional. Éstos, efectivamente, no pueden –a riesgo de dejar de cumplir una de sus funciones

específicas— hacer caso omiso a una lógica de “información” sobre la realidad y la actualidad que, junto a otras lógicas —como, por ejemplo, una lógica empresarial o político-estatal— define las orientaciones de sus intervenciones.

Asimismo, la complejidad de la opinión pública en las sociedades actuales, reduce notoriamente las posibilidades de manipulación de la información por parte de los medios masivos de comunicación. Como efecto de la diversificación de los públicos, la progresiva autonomización de la esfera de la opinión respecto del poder político y la sujeción de los medios a una lógica empresarial que los obliga a desarrollar una oferta de información atractiva para públicos ampliados y con posibilidades de seleccionar entre distintas fuentes de información, los medios más que actores con intereses políticos definidos se constituyen en escenarios donde los conflictos sociales se expresan buscando legitimarse frente a la opinión pública. En este sentido, tomar a los diarios nacionales como fuente para el desarrollo de un trabajo de las características del nuestro no implica dar cuenta de manera parcial y/o distorsionada del problema de la pobreza, sino atender a la principal arena pública donde la pobreza se construye como problema social.

Terremotos, inundaciones, olas de frío, crimen: eventos que hacen visibles a los pobres

En este apartado nos preguntamos por el tipo de eventos que operan como disparadores de las coberturas que realizan los medios sobre la cuestión de la pobreza. Como señalamos en la introducción, la pobreza en sí misma no es un hecho con valor de noticia, por lo tanto, su tematización mediática depende de una serie de acontecimientos o eventos cuya indagación ilustra la forma en que los medios representan el fenómeno. Catástrofes naturales, movilizaciones políticas, discursos de dirigentes políticos en ocasiones institucionales, hechos de violencia, publicación de indicadores, políticas públicas específicas, etc., suponen acontecimientos cuyo valor implica distintas orientaciones argumentativas y, consecuentemente, diversos marcos interpretativos acerca del fenómeno. A continuación presentamos los eventos más significativos que hemos encontrado en nuestro *corpus* como disparadores de la atención mediática al problema de la pobreza. Una breve descripción de los mismos

nos permitirá observar los procedimientos discursivos a través de los cuales los medios relevados presentan y caracterizan el fenómeno.

En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró la fecha del 17 de octubre como el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Según la organización, la observancia de la fecha tiene por objeto sensibilizar a la opinión pública respecto de la necesidad de erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países. Obviamente, una primera conjetura nos condujo a preguntarnos por la resonancia de esta fecha explícitamente instituida para llamar la atención sobre el problema de la pobreza.

Los resultados son significativos. En los 21 diarios de los 7 países considerados, el evento produjo apenas 12 escuetas coberturas periodísticas. La mayor parte de ellas reseñan el discurso pronunciado por el Secretario General de la ONU, sin mayores referencias a los contextos nacionales. Otras reportan sobre actos y eventos sociales organizados para difundir la causa antipobreza: maratones solidarias, seminarios de reflexión sobre la problemática, evaluaciones periodísticas sobre el fenómeno, publicación de datos, etc. Sin embargo, no se constata que el evento haya generado debates ni intervenciones de actores relevantes.

Como muestra el caso del día de la pobreza, las fechas ritualizadas no garantizan repercusión pública por sí mismas. La atención periodística depende de un contexto previo que suscite expectativas en la opinión pública y en la prensa. El Día de la Independencia en Perú constituye un buen ejemplo de ello. Si bien se trata de un evento discursivo tradicional para la presidencia peruana, en 2007 adquirió mayor atención pública de la habitual al superponerse con un cuadro de protestas sociales generalizadas y una sensible disminución en la popularidad del gobierno al cabo de su primer año de gestión. Más adelante, el cuadro 2 muestra como Alán García alcanza gran cobertura internacional—ocupa el segundo lugar detrás de Lula da Silva— con su pedido de “paciencia” al pueblo peruano con el trasfondo de protestas sociales por la falta de “derrame” del bienestar económico.

Las catástrofes naturales o emergencias climáticas, un tipo de fenómenos que en principio no comportan una relación directa con la pobreza en tanto situación social, se han constituido en un factor que dispara la atención de la prensa en la pobreza. Los pobres son encuadrados, en estos casos, como víctimas de catástrofes.

En Perú y Argentina, el invierno de 2007 trajo picos de bajas temperaturas. Los medios hablaban de “la ola de frío”. Este hecho colocó a la pobreza y la indigencia como causas concurrentes de victimización. El frío en combinación con la pobreza generan sufrimiento y muerte: “Las víctimas, en su mayoría, eran personas de escasos recursos, que vivían en condiciones precarias y por debajo de la línea de la pobreza”, dice una reportera de *Clarín*. En estos casos, se revela la situación de pobreza apelando a la conmiseración de los lectores frente a las víctimas, pero sin una consideración de los aspectos sociales del fenómeno.

Un terremoto en la región de Ica, Perú, y unas inundaciones en la provincia de Santa Fe, Argentina, así como los recurrentes deslaves de tierras en Venezuela, ejemplifican en el período la mirada sobre los pobres como víctimas. En la prensa peruana, las imágenes mediáticas de los “damnificados”, exhiben y llaman la atención de la opinión pública sobre la situación social de pobreza preexistente en la región afectada. Como afirma un cronista, el “terremoto saca a relucir la pobreza en que vivían los habitantes de Ica”. En toda la cobertura periodística de la catástrofe natural está la idea de que la misma no es neutral, que “castiga más” a los estratos en situación de pobreza. Éstos tienen casas más vulnerables que no sobreviven a los movimientos sísmicos, observan recurrentemente los medios peruanos. En los casos argentino y venezolano, la mayor vulnerabilidad se encarna en la imagen de “las tierras inundables” como las habitadas por los pobres. Por otra parte, la prensa no sólo enfatiza que los pobres tienen mayores probabilidades de convertirse en víctimas, sino que también disponen de menores recursos materiales y culturales para recomponer sus vidas *a posteriori*. En definitiva, en esta narrativa no aparece en tanto víctima de la pobreza en sí misma, sino de la catástrofe que la saca a relucir.

También puede suceder que la mera revelación del padecimiento adquiriera un carácter político. En el caso peruano se produjo en los espacios de opinión de la prensa, a raíz de repetidos llamados públicos a la solidaridad de los peruanos, y ante una serie de públicas acusaciones recíprocas entre ONGs y gobierno sobre la asistencia a los damnificados, un debate sobre los alcances de la solidaridad ante la situación de pobreza estructural. “La solidaridad saca de la emergencia pero no de la indigencia” fue el argumento de quienes criticaron que los repetidos llamados a la solidaridad de los conacionales conllevan, tácitamente, una renuncia a los deberes del Estado o la aceptación del *status quo* distributivo. El argumento es que la solidaridad

con las víctimas-pobres merma en forma paralela a la salida de la cuestión de la catástrofe de la visibilidad pública que le dan los medios.

Hechos delictivos, criminalidad, narcotráfico y otras situaciones de violencia social suelen ser, dada la inclinación institucional del periodismo por los hechos policiales, algunos de los acontecimientos que más concitan la atención mediática sobre los pobres. Como mostraremos en la segunda parte de este trabajo, al describir la cobertura de la prensa brasileña de un enfrentamiento entre policía y bandas armadas en las favelas de Río de Janeiro, este tipo de disparadores de atención condicionan la mirada que se le otorga al fenómeno de la pobreza. Así como las catástrofes naturales tienden a mirar a los pobres como víctimas, estos eventos sesgan el fenómeno de la pobreza en la lógica de la marginalidad, el delito, en definitiva, la criminalización de la pobreza.

La publicación periódica de informes sobre indicadores de pobreza por parte de organismos públicos no constituye en sí misma un evento que convoque la atención de los medios. Se trata, en general, de un ritual burocrático que en algunos casos merece algunos comentarios de especialista en la materia o una escueta nota informativa. Sin embargo, en los casos de Argentina y Chile, durante el período estudiado, se verifica una importante politización del problema de la pobreza, generada precisamente como consecuencia de la publicación de este tipo de datos. En ambos casos comienza por cuestionarse la pertinencia de los instrumentos técnicos para medir el fenómeno, lo que genera una discusión acerca de la eventual manipulación que los gobiernos respectivos estarían realizando de los datos para encubrir la persistencia de la pobreza. Una vez iniciada la discusión sobre la pertinencia de los índices entre gobierno y oposición, comienzan a sumarse, en un segundo momento, distintos actores que, más allá de la supuesta manipulación, enfocan el debate al problema de las políticas efectivas para erradicar la pobreza. En Chile, una intervención del Obispado llamando la atención sobre la desigualdad social y su impacto sobre “la paz de las familias”, provoca un nutrido debate acerca de las estrategias de mercado implementadas para resolver la cuestión. En Argentina, la renuncia de los técnicos encargados de construir los indicadores por la intervención del gobierno, hace que el sindicato de empleados públicos ponga en cuestión el real efecto del crecimiento del empleo en la reducción de la pobreza.

Otra conjetura respecto de los eventos que convocan la atención mediática sobre la cuestión de la pobreza, invita a relevar las políticas sociales, aquellas específicamente destinadas a combatir la pobreza, a las que atienden los medios de comunicación. Un análisis comparativo de la presencia en la prensa de Argentina y Brasil de informaciones específicas acerca de la política social implementada en ambos países, arroja resultados interesantes.

El “Bolsa Família” es uno de los mayores programas sociales de transferencia de renta del mundo. Creado por el gobierno federal de Brasil, otorga un subsidio a unas 45 millones de personas y beneficia, por lo tanto, al 24% de la población brasileña. Similar a los demás programas focalizados que dominan hoy en la política de lucha contra la pobreza en la región, el Bolsa Família otorga un monto de unos 230 reales, más asignaciones por hijo, a familias en situación de pobreza y pobreza extrema de la población de todo el país. A cambio se exigen, en la modalidad general, ciertas contraprestaciones como asistencia escolar.

¿Cómo aparece el programa en la cobertura periodística? Son numerosas las coberturas que tratan el tema en forma directa en el período de investigación. Gran parte de ellas son notas meramente informativas que divulgan cifras y datos de organismos públicos oficiales como el *Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada* (IPEA) o el *Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística* (IBGE). En un caso se trata de una crónica que recoge la denuncia de un organismo estadual de Río de Janeiro que detectó a beneficiarios del plan entre alumnos de escuelas privadas y, por lo tanto, excluidas de la población destinataria del programa.

¿Qué evaluaciones recibe el programa en las voces seleccionadas por los medios? El tradicional e influyente *O Estado de Sao Paulo* (*Estadao*), por lo general sumamente crítico del gobernante Partido dos Trabalhadores (PT), dedica un editorial al Bolsa Família.² A partir de un análisis de las cifras oficiales destaca el carácter adecuado de la focalización en tanto llega efectivamente al 40% de los más pobres y logra disminuir la concentración de la renta nacional en un 4%. En general, el programa es tratado como una herramienta técnicamente correcta. La crítica se concentra en su impacto político. El editorial afirma que, pese a constituir menos de una quinta parte de un salario mínimo, el programa explica la popularidad del presidente Luiz Inácio

2 “O Brasil do Bolsa-Família”, *OESP*, 23/8/07.

“Lula” da Silva. “No todos los *bolsistas* son necesariamente lulistas. Existen los que ni siquiera saben de dónde proviene el dinero. Mas el desempeño electoral del presidente en el Nordeste ciertamente guarda íntima relación con el hecho de que allí viven prácticamente la mitad de los destinatarios del programa”. En una columna de opinión del *O Globo*, el diario del conglomerado multimedia de Río de Janeiro, la estructura argumental es similar.³ Citando un estudio técnico que compara el programa con sus similares en Chile y México, se afirma que el Bolsa-Familia “no es la nulidad asistencialista que induce a la inercia apuntada por sus críticos”. Destaca así mejorías correlacionadas, registradas en educación, salud, reducción de mortalidad y trabajo infantil, además de impactar en la disminución del coeficiente de Gini que indica los niveles de desigualdad. Sin embargo, la articulista cita el estudio comparativo para señalar que el programa brasileño es el más propenso a desvíos hacia personas que no lo necesitan. En su evaluación tampoco cabe duda que el “Bolsa Família ayuda a componer los índices de popularidad de Lula”. El *Estado* publica también una entrevista a un economista, experto en políticas sociales de la Fundación Getulio Vargas (FGV), quien considera al Bolsa mejor que los programas tradicionales, si bien observa que persiste la limitación en la “capacidad de transformar la vida de los pobres” y sugiere mejoras cualitativas en acciones sociales unificadas que “favorezcan el acceso de las franjas pobres al mercado”.⁴ Un columnista habitual de *O Globo* cita un trabajo de científicos políticos del *Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro* (IUPERJ), una prestigiosa institución académica, que confirma en un análisis de correlación estadística hecha con datos oficiales que la elección de Lula de 2006 “está claramente asociada a los Efectos del Bolsa Família”. El articulista destaca la observación del cambio del perfil del votante lulista entre 2002 y 2006 “que salió de los grandes centros urbanos para los *grotões* –los pobres– de las regiones norte y nordeste.”⁵

En comparación con Brasil, la prensa argentina apenas contiene discusión sobre los programas asistenciales. Un buen indicador de ello es que si en Brasil el programa Bolsa Família aparece mencionado en 11 títulos en la prensa, en el caso de la Argentina no hay un solo registro que haga referen-

3 Teresa Crunivel, “Bolsa Família e seus parentes”, *O Globo*, 12/8/07.

4 “Faltam portas de saída para Bolsa-Família, diz especialista”, *OESP*, 23/8/07.

5 Merval Pereira, “Votos X Benefícios”, *O Globo*, 12/8/07.

cia a la política asistencial. De este modo, la arena periodística haría pensar que no existen en la Argentina programas focalizados.

En los años que siguieron a la crisis de 2001, en Argentina los programas de asistencia directa cobraron gran protagonismo en la contención social. Conceptos como el “Plan trabajar” o “Jefes y Jefas” fueron términos que circulaban abundantemente por el espacio público. En el contexto del fuerte descrédito de la política, la opinión pública asoció directamente estos programas al clientelismo y a la política de aparato.

Los programas están sin embargo, hoy, en un período de transición. El Estado ha promovido la migración hacia los programas “Familias” y el “Seguro de empleo y capacitación”. En 2005, tuvo lugar en los medios una discusión entre especialistas y funcionarios sobre las razones técnicas que justificaban estos cambios. Sin embargo, considerados desde su proporción en el gasto social como en la cantidad de personas afectadas, estos programas siguen siendo fundamentales en la política social argentina. Su importancia real no es sustancialmente menor que en otros países de la región.

La diferencia en la repercusión mediática de la política social en Argentina y Brasil debe interpretarse por el éxito del gobierno argentino en instalar en la agenda pública un imaginario productivista que vincula la lucha contra la pobreza a la creación de empleo. Es así que la política social en Argentina, aún manteniendo una importancia central, debido a la persistencia de sectores sumidos en la indigencia y la informalidad, ha desaparecido de la agenda de los medios. El círculo del desinterés mediático se completa con la ausencia de producción de información fehaciente producida por el gobierno acerca de la situación de la política social que, como dijimos, sigue siendo un aspecto central de la lucha contra la pobreza en el país. Excepto en el Perú, donde se detecta una engorrosa discusión entre el gobierno central y las Presidencias Regionales acerca del control de los fondos destinados al asistencialismo, la prensa de la región no incluye una cobertura significativa acerca de la política social en su tematización de la pobreza.

Uno de los acontecimientos que más convocó la consideración del tema de la pobreza en toda la prensa latinoamericana durante el período estudiado fue, sin dudas, el viaje papal a Brasil. Durante el mes de mayo de 2007, el Papa Benedicto XVI realizó una gira de 5 días por Brasil, al cabo de la cual

dejó inaugurada la 5ª Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (CELAM) en la ciudad de Aparecida, en el estado de San Pablo.

Recorrer las posiciones de los distintos medios periodísticos al respecto nos permitirá, tanto una primera aproximación a los distintos significados asignados al problema de la pobreza, como identificar las evaluaciones que los medios y otros agentes relevantes en ellos representados realizan sobre una de las instituciones con mayor presencia en el debate sobre la pobreza: la iglesia católica.

Cuantitativamente, la Argentina es el país en el que más se destaca el acontecimiento, pero con enmarcamientos no siempre favorables en importantes voces mediáticas. El enviado de *Clarín* en Roma, que habitualmente escribe en forma crítica sobre cuestiones del Vaticano, a la vez que abre gran espacio a las posiciones de voces disidentes al interior de la Iglesia, critica por conservadora y eurocéntrica la gestión pontificia, en cuya agenda no ve una mirada frontal a los problemas de la pobreza: “Los temas específicos de la realidad latinoamericana, como la pobreza y la miseria, y las enormes desigualdades sociales, fueron evocadas por Benedicto XVI pero en forma secundaria respecto a los temas morales en los que ha centrado su pontificado”.⁶ El efecto de despolitización de la pobreza a través de la invocación de la moral católica constituye, como veremos, uno de los motivos fundamentales de crítica a las intervenciones papales respecto de la región.

La Nación, en cambio, elogia el “alegato antipobreza de Benedicto” destacando que se tomó una clara “opción por los pobres pero ya sin la resonancia ideológica que tuvo durante la década del ‘70 en pleno auge de la Teología de la Liberación”. Desvinculada de todo contenido ideológico-político, la opción por los pobres queda reducida a su dimensión estrictamente confesional: “la opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica, en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza”.⁷ Sin referencias a la omisión papal del problema de la desigualdad, que *Clarín* asocia a la denuncia de la pobreza, *La*

6 Julio Algañaraz, “La Iglesia es fe y no ideología”, dijo el Papa en su misa de despedida”, *Clarín*, 14/5.

7 Silvina Premat, “Inquietan a la Iglesia latinoamericana los gobiernos autoritarios”, *La Nación*, 31/5.

Nación destaca el cuestionamiento del pontífice a “los gobiernos autoritarios” que, señala la cronista, remitiendo a fuentes del CELAM, serían los de Venezuela y Bolivia. Esta posición es consecuente con la abrumadora cantidad de casos en los que el tradicional diario argentino invoca la autoridad eclesiástica y la moral católica para cuestionar la inacción política respecto del problema de la pobreza.

El periodista uruguayo y ex presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Danilo Arbilla, emite una severa evaluación –en *La República* de Lima– de la posición de la Iglesia ante la pobreza en Latinoamérica. Interpelado por Lula en su pelea contra los subsidios agrícolas de los países desarrollados, el Papa decidió no pronunciarse, comprometido con su visión doctrinaria conservadora, por la cual, interpreta el periodista, antepone los intereses de los productores agrícolas europeos, a quienes considera el bastión moral, y por lo tanto su base política, al interés de los pobres del mundo no desarrollado.⁸

En México, la visita del Papa a la región revela una fuerte discrepancia ideológica entre *La Jornada*, con una línea editorial de centro izquierda en cerrada oposición al gobierno de Felipe Calderón por sus políticas neoliberales, y el diario *El Economista*, cercano a los intereses empresariales. *La Jornada* es quizá el medio de los relevados que presenta una crítica más frontal a los pronunciamientos del Papa en la región. En una nota titulada “Benedicto XVI: fracaso del entendimiento” se realiza un balance sumamente negativo de la visita del Papa, donde se le critica no haber hecho un abordaje profundo de la cuestión de la pobreza, e incluso se lamenta la puerilidad con la que trató otras problemáticas que afectan a la región como cuando dijo: “Dios les pedirá cuentas a los narcos”. El diario enumera el conjunto de flagelos que castiga a la región: “la pobreza, la desigualdad, la insuficiencia educativa, la insalubridad, la corrupción de las elites gobernantes, la discriminación de los pueblos indígenas, la situación de catástrofe de la mayor parte de los campesinos, las persistentes afrentas a los derechos humanos y la desintegración del tejido social”, para contrastarlas con el discurso superficial de Ratzinger. En definitiva, la actitud del Papa asume la forma de una traición esperada: “Al dar la espalda a Latinoaméri-

8 Danilo Arbilla, “Pobres los pobres”, *La República*, 19/05.

ca, el antiguo perseguidor de los teólogos de la liberación da la espalda a su propia Iglesia en los países de la región”.⁹

En contrapunto directo con el cuestionamiento realizado por *La Jornada*, *El Economista* destaca la explícita distinción que introdujo el Papa entre la moral cristiana de la solidaridad como rechazo de la pobreza y cualquier tipo de ideología política: “El Papa Benedicto XVI afirmó hoy que la fe en Cristo y no ideologías políticas, movimientos sociales o sistemas económicos, hacen de América Latina el ‘continente de la esperanza’. En un mensaje directo contra la llamada Teología de la Liberación latinoamericana, que propone una lectura del mensaje cristiano a través de las luchas sociales, el Papa indicó cuál debe ser el interés fundamental de los católicos en esta región del mundo”.¹⁰

La postura de *Reforma*, un diario con una posición liberal y modernizadora, completa el cuadro de evaluación de la visita de Benedicto, connotando el nivel de politización que adquiere la cuestión de la pobreza en México. Insistiendo en la fractura producida en la cúpula episcopal latinoamericana por las distintas posiciones acerca del rol de la Iglesia frente a los sectores más postergados, *Reforma* publica una columna del teólogo crítico Leonardo Boff: “El catolicismo del compromiso ético se inspira en la acción católica y en las pastorales sociales y culmina en la teología de la liberación. Este modelo requiere mediaciones socioanalíticas porque está interesado, desde su perspectiva espiritual, en la transformación social. (...) ¿Cuál de ellos es el más apropiado para una nación que debe revisar su anti-historia heredada del colonialismo, del etnocidio indígena, del esclavismo y de la moderna dependencia de los centros metropolitanos? La respuesta depende del nivel de conciencia alcanzado por los católicos. Yo creo que el catolicismo devocional no tiene potencialidad de transformación social por estar volcado sobre sí mismo, mientras el otro articula constantemente fe y justicia, y evangelio con compromiso de liberación. Es teológicamente frágil la tesis de que Dios es explícitamente imprescindible para construir una sociedad justa. Hay silencios significativos en los discursos del Papa: sólo una vez se refirió a las comunidades de base, una vez a la opción por los pobres, una vez a la libe-

9 “Benedicto XVI: fracaso del entendimiento”, *La Jornada*, 14/5.

10 “Iglesia no hace proselitismo: Papa”, *El Economista*, 13/5.

ración, nunca a la teología de liberación y a las pastorales sociales, nunca al gravísimo problema del calentamiento global”.¹¹

En un país con un alto nivel de movilización social de los sectores más postergados como México, la controversia generada por la presencia del Papa en la región recorta los extremos de politización del problema de la pobreza.

El caso de Chile contrasta con el de México. Si en México la visita del Papa a la región generó una marcada controversia ideológica sobre la participación de la Iglesia en la lucha contra la pobreza y, al extremo, sobre la propia definición y caracterización del fenómeno, en Chile el acontecimiento sólo fue considerado por la prensa a través de crónicas descriptivas que glosan los temas tratados por el pontífice. *El Mercurio* resaltó el cuestionamiento de Ratzinger a los gobiernos autoritarios en América Latina, mientras que *La Nación* reivindicó su apelación al compromiso solidario de los católicos con los pobres sin mayores inflexiones político-ideológicas. Se puede conjeturar –siguiendo la idea de que los discursos deben ser analizados contrastando sus condiciones sociales de producción– que, si bien en la prensa chilena, como veremos, la Iglesia funciona como una tribuna moral indiscutible en las discusiones que genera la pobreza, la ausencia de debate sobre la presencia del Papa y la Conferencia de Aparecida se debe al consenso que existe en la prensa chilena sobre el modo de enfrentar el problema de la pobreza y la exclusión. Efectivamente, como se analiza en el siguiente apartado, Chile es el caso de los estudiados donde el discurso sobre la pobreza se enmarca en un entendimiento de fondo sobre una estrategia de mercado para atacar sus causas y neutralizar sus efectos.

En Venezuela, donde la prensa cuestiona seriamente la politización de la pobreza realizada por Chávez para sustentar su liderazgo, la presencia del Papa en Latinoamérica se reseña en clave crítica de las ideologías. En el principal artículo dedicado al tema, *El Universal* titula: “Iglesia de América se alejará de ideologías”, destacando las posiciones críticas del Papa respecto del socialismo y el capitalismo como ideologías perimidas que no han podido superar la pobreza y la desigualdad. La intervención del diario se produce en el contexto de una publicitada polémica entre el presidente y la Conferencia

11 Leonardo Boff, “Los silencios de Benedicto”, *Reforma*, 17/5.

Episcopal Venezolana, a partir de un comunicado de esta última cuestionando la limitación al derecho de libre expresión, por el cierre de *Radio Caracas Televisión* (RCTV), y declarándose alarmada por la situación de pobreza y violencia que vive el país.

El crecimiento del pentecostalismo y el decrecimiento de la población católica en la región, en particular en Brasil, fue una de las principales cuestiones en la agenda del Papa y de la Conferencia. La prensa brasileña se mostró particularmente interesada en la cuestión de la migración de católicos hacia sectas y grupos evangélicos. En numerosos artículos se aporta información de la que se desprende que la preferencia por el pentecostalismo se vincula a las nuevas formas de pobreza, en particular, a aquellos pobres que sufren la violencia, el desempleo y el mal funcionamiento del Estado. En efecto, la prensa aporta datos estadísticos que muestran que es en la periferia urbana, a diferencia de lo que sucede entre los pobres del ámbito rural, donde el catolicismo sigue siendo fuerte.

¿Qué actores y qué voces construyen el problema de la pobreza en la prensa?

En este apartado nos proponemos indagar las voces que autorizan los medios para enunciar discursos legítimos sobre el problema de la pobreza. Los medios constituyen una arena pública en la que el acceso de tales voces se encuentra regulado a partir de una serie de mecanismos y procedimientos complejos de descifrar. La preferencia del periodismo por cierto tipo de voces no tiene que ver, necesariamente, con sus preferencias ideológicas sino con las rutinas profesionales. Privilegian aquellos ámbitos en los que rutinariamente obtienen material. Ello produce un sesgo, involuntario, a favor de burocracias públicas y privadas. Este fenómeno se ve reflejado en la cobertura de la pobreza: políticos, funcionarios y organismos internacionales como voces privilegiadas. Sin embargo, estos sesgos no se traducen necesariamente en una cobertura favorable a las posturas y roles jugados por estos actores privilegiados. Si bien tienen poder de agenda, tienen una capacidad muy limitada para controlar los encuadres (*framings*) que el periodismo construye a partir de sus estímulos. Este rasgo se confirma en la investigación presente. Los actores políticos son, paralelamente a su rol ge-

nerador de agenda, los más criticados y responsabilizados en la cobertura periodística de la pobreza.

Los propios pobres, por otra parte, aun desde marcos institucionales u organizativos, tienen grandes dificultades en lograr atención mediática.

Más allá del control sobre la regulación y modulación de las voces sociales y políticas que dependen del periodismo y las prácticas vinculadas a la construcción de noticias, los periódicos –en tanto medios singulares– administran el acceso de voces en la medida que distribuyen espacio, concediendo lugar en columnas de opinión o entrevistando actores.

El siguiente cuadro muestra los roles sociales e institucionales de los actores entrevistados y de los columnistas invitados en la muestra relevada. Se trata de aquellos casos en los cuales los protagonistas de la información toman la palabra en la forma del discurso directo.

Cuadro 1: Roles sociales de los entrevistados y de los columnistas invitados

Funcionarios gubernamentales (presidentes, ministros, secretarios, funcionarios de área)	33
Funcionarios de organismos internacionales	17
Economistas	16
Empresarios y representantes empresariales	16
Políticos (legisladores, miembros de la oposición, candidatos, ex presidentes)	15
Académicos e investigadores	15
Directivos de organizaciones no gubernamentales y dirigentes sociales	13
Religiosos y representantes eclesiásticos	6
Profesionales de áreas de salud y educación	6
Consultores/técnicos	5
Dirigentes sindicales	1
Total	143

Esta muestra de 143 registros de roles sociales e institucionales de los entrevistados y los columnistas invitados en la totalidad de los medios relevados, nos ofrece una aproximación al universo de voces que los medios seleccionan y autorizan para hablar con legitimidad del problema de la pobreza. Es interesante destacar la alta incidencia de las voces gubernamentales que –si bien por las razones expuestas, tienden a ser una de las fuentes más consultadas por los periodistas– revela la dimensión política y la centralidad del Estado en la gestión y resolución de la problemática de la pobreza. No debe desatenderse, sin embargo, que, dada la relevancia que se les otorga, fuera de esta modalidad de discurso directo, se trata –como dijimos– de los actores más severamente criticados por el periodismo respecto de sus funciones y responsabilidades atinentes a la cuestión de la pobreza.

La participación de los funcionarios de organismos internacionales da cuenta de la influencia, tanto financiera como técnica, que los mismos han adquirido en las políticas de lucha contra la pobreza en América Latina.

Es común encontrar en la prensa de la región referencias a los informes de los organismos internacionales para autorizar los más diversos análisis y las más variadas interpretaciones políticas de las causas y consecuencias del fenómeno. Sin embargo, son muy escasas las intervenciones que cuestionan la autoridad técnica y la decisiva influencia que estas instituciones han tenido en la política social de la región desde la década del noventa.

Si bien el total de la participación de funcionarios políticos duplica a la segunda categoría –los funcionarios de organismos internacionales–, la suma de las dos categorías siguientes, economistas y empresarios, iguala la presencia de los representantes estatales. Este dato, revela la persistente legitimidad de un discurso técnico económico que enmarca el tema de la pobreza como cuestión resoluble a través de las estrategias de mercado. En este mismo sentido, es notable la predominancia del discurso económico en tanto discurso técnico-académico sobre la pobreza, en relación con las competencias de otros saberes especializados: la suma de sociólogos, antropólogos, geógrafos, demógrafos, etc., no alcanza a igualar la autoridad asignada por los medios relevados al discurso económico. Como veremos, el caso chileno constituye el paradigma de este enfoque.

Al mismo tiempo, los casi idénticos valores entre la participación de voces de funcionarios políticos, por un lado, y empresarios y economistas, por el otro, sugiere una tensión entre el rol regulador del Estado y la dinámica autónoma del mercado como alternativas al dilema de la pobreza. Como veremos, esta polaridad se constata en varios de los casos estudiados.

Finalmente, cabe destacar la importante presencia entre las voces autorizadas de representantes de diversas organizaciones no gubernamentales, las cuales operan en el espacio habilitado por las estrategias de intervención de los organismos internacionales sobre la política social en la región.

Por fuera de los espacios de opinión que acabamos de analizar, donde los actores enuncian sin intervención del periodista, también nos resultó oportuno analizar los procedimientos de selección de voces en aquellos espacios donde es el periodista el que enuncia la noticia. La pregunta pertinente en este caso es qué voces se constituyen en privilegiadas como estímulo y fuente de la labor periodística al momento de hablar de la pobreza. Teniendo en cuenta los resultados del cuadro anterior, donde se evidencia la centralidad de los funcionarios políticos, nos pareció pertinente explorar la participación de los jefes de estado en la cobertura periodística de la pobreza.

El rol institucional de la presidencia es un lugar privilegiado para obtener acceso a la esfera pública mediática. Los micrófonos del periodismo suelen estar abiertos a toda ocasión en que los titulares del Poder Ejecutivo decidan usar la palabra. Esto da a los presidentes una gran capacidad de agenda. ¿Cómo han utilizado los presidentes de los países en cuestión esta capacidad institucional? ¿Qué grado de protagonismo han tenido con relación a la construcción discursiva del problema de la pobreza ante la opinión pública?

El siguiente cuadro mide la cantidad de títulos de notas periodísticas en los que los presidentes aparecen, citados o parafraseados, haciendo afirmaciones, sugerencias, críticas, advertencias, etc. Debe especificarse que no nos referimos aquí a las apariciones de los presidentes en tanto agentes de las narrativas periodísticas, como haremos a continuación. Los casos contabilizados dan cuenta de situaciones en las que un jefe de estado da un discurso ante un público determinado, como por ejemplo cuando Alán García habló ante una comunidad de campesinos y suscitó el siguiente titular en la prensa: “Presidente García asume el compromiso de combatir la pobreza en la agricultura”.

La primera columna (cobertura local) indica la cantidad de títulos generados en la prensa del propio país, la segunda columna (cobertura regional) muestra la atención periodística generada en la prensa de los seis países restantes.

Cuadro 2: Capacidad de agenda presidencial

presidente/país	cobertura local	cobertura regional
Kirchner / Argentina	2	3
Morales / Bolivia	2	1
Lula / Brasil	22	16
Bachelet / Chile	9	1
Calderón / México	7	2
García / Perú	8	6
Chávez / Venezuela	5	4

La distribución de los valores en el cuadro muestra un comportamiento relativamente homogéneo entre los líderes de todos los países estudiados exceptuando Brasil. El llamativo protagonismo de Luiz Inácio “Lula” da Silva frente a sus pares, tanto en la cobertura local como regional, debe ser explicado. ¿Por qué emerge el presidente de Brasil como una voz cuantitativamente importante en la tematización de la pobreza? ¿En qué contexto de significaciones coloca el presidente la cuestión? El análisis de las intervenciones presidenciales revela que varias de ellas se originan en actos domésticos, en los que defiende diferentes programas sociales del gobierno federal para diferentes sectores, como campesinos del nordeste, mujeres y pobladores de favelas, y se defiende de algunos de sus críticos que tildan sus políticas sociales de populistas. Este tipo de actividades lo asemeja a los demás mandatarios. Lo que explica la diferencia es que Lula participa como actor en la arena internacional con una intervención político-discursiva sobre el orden económico-ambiental global, en la que el presidente aspira a colocar a Brasil como protagonista –acorde a su posición de potencia emergente junto a la India– de reclamos de justicia internacional y de proponente de estrategias de desarrollo global. El papel de Lula como portavoz de los países en desarrollo tiene su momento principal en la cumbre del G-8 en Alemania donde se

continuaron las negociaciones sobre comercio internacional de la Ronda de Doha. Sin embargo, aprovechó también su audiencia con el Papa en Brasil y una serie de viajes por Latinoamérica y la India, para abogar y ganar apoyos ante la opinión pública internacional con la postura de presionar a los países desarrollados para que abran sus mercados a los países pobres, con el fin de eliminar distorsiones y subsidios a los productos agrícolas.

En combinación con lo que más adelante analizaremos como su “diplomacia del etanol” (el intento de promocionar a los biocombustibles como un arma y una oportunidad única para combatir el calentamiento global y la miseria en los países más pobres), el presidente del Brasil combina el planteo de los subsidios agrícolas con los problemas del desarrollo sustentable, otro de los tópicos con los que coloca la cuestión de la pobreza como problema que requiere de una politización y una resolución en el plano global. Es nuevamente ante la cumbre del G8, uno de cuyos temas convocantes es el cambio climático, que lleva sus críticas por la falta de compromiso respecto del calentamiento global. Lula pone énfasis en el costo para el desarrollo y la salida de la pobreza que afrontan los países poseedores de reservorios verdes que deben ser cuidados como bien público global. Ante esta inequidad, propone crear un fondo para reducir la deforestación de países pobres y en desarrollo.

El comportamiento de la prensa brasileña muestra en relación con esta cuestión un rasgo notable. Se produce un fuerte contraste con la actitud crítica hacia la presidencia en la arena doméstica, especialmente en lo que hace a la política social que es interpretada por la prensa como instrumento de poder clientelar. En cambio, la actitud hacia la búsqueda de protagonismo en la arena internacional es de acompañamiento y generosa cobertura.

Los protagonistas del relato: los agentes en la narrativa mediática de la pobreza

Si, en el análisis anterior, consideramos los procedimientos de autorización de la palabra de los actores sociales e institucionales que intervienen en el escenario mediático respecto del problema de la pobreza, a continuación identificaremos y describiremos a aquellos enunciadores que el mismo discurso de los medios instala en el lugar de protagonistas capaces de definir e

intervenir sobre el campo de la pobreza. La figura del agente se contrapone a la del sujeto paciente, es decir, el que padece los efectos o las consecuencias de la pobreza; lo que define al agente es su representación en el discurso periodístico como alguien capaz de hacer algo respecto del problema. En términos narrativos, un agente es la instancia que permite el desarrollo del relato a través de sus acciones u omisiones.

Para la construcción del siguiente cuadro tomamos como referencia todos los casos en los que aparecían agentes en los registros de noticias. De los 2.854 registros con que contamos en nuestra muestra, hemos identificado agentes en 2.373. Como se trata de una variable múltiple, es decir, en una misma noticia puede identificarse más de un agente –por ejemplo, si la noticia reporta la participación del gobierno y una ONG en la implementación de una política social– el Cuadro 3 se construyó sobre un número total de agentes de 2.803 casos. Los datos están expresados en porcentajes de participación de los agentes en cada uno de los países. Los agentes han sido tipificados en 9 categorías.

Cuadro 3: Agentes en el discurso de los medios sobre la pobreza

	Gobierno	Oposición	Empresarios	Sindicatos	Iglesia	Organizaciones Sociales	Organismos Internacionales	Especialistas Técnicos	Otros Gobiernos	Total.
Argentina	30,5	3,4	6,9	4,2	11,6	6,3	12,2	11,2	13,7	100
Bolivia	43,4	0,8	4,6	0,8	8,5	3,6	15,8	3,2	19,3	100
Brasil	37,2	1,3	4,5	0,7	5,7	7,6	20,5	3,8	18,7	100
Chile	38,8	13,2	8,7	0,6	7,2	4,6	9,1	12,0	5,8	100
México	29,4	10,0	7,6	1,0	7,4	13,5	17,3	8,2	5,6	100
Perú	46,8	4,3	16,2	2,9	3,1	6,6	9,2	3,7	7,2	100
Venezuela	35,7	3,2	10,1	0,2	7,2	3,9	12,6	10,1	17,0	100
Total Gral.	36,8	5,2	9,1	1,4	7,2	7,1	14,1	7,7	11,4	100

Al igual que en el análisis de los procedimientos de autorización de voces para hablar legítimamente de la pobreza, en la representación general de los agentes de la narración periodística, las instituciones gubernamentales y los organismos internacionales aparecen en posición de protagonistas prin-

cipales del relato mediático sobre la pobreza. Surge como novedoso el papel desempeñado por otros gobiernos en el relato de los medios latinoamericanos sobre la pobreza. Lo que explica esta presencia es el peso de las relaciones bilaterales, los acuerdos de cooperación, los programas de desarrollo y la incidencia del comercio internacional y los tratados de libre comercio sobre la economía de los países de la región.

Entre los actores locales no estatales tienen preponderancia los empresarios, seguidos por las organizaciones sociales y, con una presencia muy restringida, los sindicatos. Asimismo, es notable que agentes como los empresarios, las organizaciones sociales e, incluso, los técnicos y especialistas, aparezcan en las narrativas periodísticas sobre la pobreza con un mayor protagonismo que la oposición política. Este dato revela dos circunstancias: por un lado, la crisis de la oposición como actor institucional en las democracias latinoamericanas y, más específicamente, la limitada presencia del tema en las instituciones de representación política.

Finalmente, es de destacar el peso de la Iglesia como un agente relevante con idéntica influencia que las organizaciones sociales y los especialistas y técnicos en el tema.

En el caso de Argentina se percibe una importante participación de los agentes sindicales si se compara con la media y el resto de los países. Esto se vincula con la tradición de participación sindical en la distribución del ingreso, en un contexto de reactivación económica y discusión del problema del empleo formal y concertado como salida de la pobreza. También destaca el peso relativo de la Iglesia respecto de otros contextos nacionales, que se explica por la intensa cobertura que se le dio a la visita papal a la región, particularmente por parte del diario *La Nación*, cuyas invocaciones a la autoridad eclesiástica para tratar el problema de la pobreza son muy frecuentes. El relativamente alto valor de la categoría “otros gobiernos” resulta, en buena medida, por el debate acerca de la criticada política de alianzas regionales del gobierno y su impacto sobre la pobreza.

En los medios bolivianos la centralidad del gobierno como agente debe ser atribuida a la polarización de la opinión, impulsada por la prensa en la forma de una sistemática y cerril crítica. En el mismo sentido debe ser interpretada la ausencia de la palabra de la oposición político partidaria en

el debate sobre la pobreza. Son los medios mismos los que se colocan en el rol de opositor, señalando la inviabilidad del modelo llevado adelante por el gobierno de Evo Morales, y profundizando el antagonismo social que le imputan al presidente como estrategia de construcción política. Por último, el máximo valor en la participación de otros gobiernos como agentes del conflicto derivado de la pobreza, se vincula con la permanente denuncia de la injerencia venezolana en los asuntos domésticos, interpretada como violación de la soberanía y error estratégico en la elección de los aliados en la lucha contra la pobreza.

Como analizamos en el cuadro número 2, el alto perfil internacional del presidente Lula informa la representación de los medios brasileños sobre los agentes capaces de intervenir en la problemática. Este mismo factor conduce a que se movilicen discursos de los organismos internacionales y de otros gobiernos tomando posición respecto de sus propuestas para superar la pobreza en el orden global.

A diferencia de lo que sucede en el resto de la región, el caso de Chile muestra una importante intitucionalización de la discusión sobre la pobreza. La participación del gobierno está por encima de la media y la de la oposición casi triplica el promedio y está muy por encima de la del resto de los países. Los diarios chilenos construyen al gobierno y a la oposición como agentes protagónicos en el debate sobre la pobreza. Asimismo, se presenta un refinado debate acerca de la evolución del modelo de desarrollo para superar la desigualdad que instala en una posición de privilegio a los técnicos y especialistas como agentes del debate, tanto en la definición y caracterización, como en las propuestas para su resolución. A diferencia de Argentina y Bolivia, Chile ha resuelto su modelo de integración internacional, por lo cual, el problema de las alianzas regionales incide poco en la discusión sobre la pobreza, lo que explica el bajo valor de la participación de otros gobiernos como agentes en la problemática de la pobreza.

En la prensa mexicana el dato más destacado es la relevancia que se le asigna a las organizaciones sociales en el conflicto vinculado con la pobreza. La preponderancia que le confiere el diario de centroizquierda *La Jornada* a la resistencia de los movimientos indígenas y campesinos al “régimen neoliberal”, encarnado por los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional

(PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), justifica el máximo valor de este agente en el país. Algo similar puede decirse del valor –que duplica la media regional– de la oposición. Las irregularidades acontecidas en la última elección conducen al diario, que hegemoniza la discusión sobre la pobreza en el país, a denominar “presidente de facto” al actual presidente y “presidente legítimo” al líder de la oposición Andrés Manuel López Obrador.

El valor máximo detentado por la participación del gobierno peruano como agente debe interpretarse en relación a las tensiones sociales suscitadas por los altos índices de crecimiento y las expectativas distributivas que convergen en forma de demandas dirigidas al poder ejecutivo. En un país centralista, cuyo rumbo económico ha sido errático, con consecuencias devastadoras en términos sociales y con actores políticos sumamente inestables, se concentran las expectativas en un presidente que asume por segunda vez el gobierno del que se esperan definiciones permanentes. Por otra parte, el valor pico de la presencia empresarial como agente debe entenderse en función del rol del diario *Gestión* como efectivo órgano de difusión de la mirada empresarial sobre el tema de la pobreza.

Finalmente, el caso de Venezuela demuestra la inexistencia de una sociedad civil autónoma capaz de constituirse en agente de la discusión sobre la pobreza. Los bajos valores de las categorías organizaciones sociales y sindicatos muestran cómo la prensa del país pone en escena un conflicto directo con el presidente, donde la oposición tampoco adquiere valores significativos. Asimismo, es destacable la importancia que la prensa asigna al liderazgo regional de Chávez en las discusiones sobre el combate a la pobreza.



Segunda parte: los tópicos y los debates sobre la pobreza

En este capítulo se presentarán los principales tópicos argumentativos que organizan la discusión sobre la pobreza en los medios relevados. Los tópicos constituyen los núcleos semánticos con base en los cuales se ordenan las distintas representaciones que conforman una narración. Alrededor de estos ejes discursivos se establecen causas, responsabilidades, diagnósticos, alternativas, se proponen soluciones y se prescriben y evalúan acciones. Al tratarse de discursos políticos que circulan en la prensa, los tópicos operan como ejes estructuradores de las distintas posiciones polémicas que asumen los agentes.

El conjunto relevado muestra un escenario latinoamericano con intensa discusión política. En este ambiente, la cuestión de la pobreza es interpelada en torno de ciertos tópicos controvertidos.

El más clásico de ellos es el rol del Estado y el mercado en la creación y distribución del producto social. Otro es la controversia en torno a si el propósito de la intervención política debe ser la inclusión y adaptación de los pobres, en tanto individuos, a la moderna estructura del mercado, o si, en cambio, las estrategias de desarrollo deben ser sensibles a formas de vida comunitarias. Una cuestión importante en la que varían los casos latinoamericanos es la caracterización de la pobreza como rural o urbana y en las problemáticas específicas que de ello se derivan en los discursos. Otro tópico, de ingreso reciente en el espacio público globalizado, y que aparece con fuerza en este estudio, es el de las tensiones entre sustentabilidad ambiental y sustentabilidad económico-política de las salidas de la pobreza.

Claro está que no se trata de oposiciones excluyentes dado que los discursos están sometidos a condiciones de producción variables y las posiciones de los agentes también reconocen modificaciones. Sin embargo, para poder analizar tales variaciones es necesario identificar las principales categorías

que informan los debates. Ésa es precisamente la función de los tópicos argumentativos. En los siete países estas dimensiones analíticas aparecen mezcladas en diferentes combinaciones. El capítulo se propone describir y analizar los principales debates.

“El modelo chileno”: la estrategia de mercado en el combate contra la pobreza

Comenzaremos presentando los debates configurados en torno a la oposición clásica Estado-mercado. La controversia remite a la capacidad de una u otra instancia de constituirse en un sistema equitativo de distribución de recursos capaz de neutralizar la desigualdad y la pobreza. Al respecto, son reiteradas en la prensa latinoamericana las referencias al modelo chileno como tipo puro y paradigma de una estrategia de mercado para afrontar el problema de la pobreza. Efectivamente, el análisis de la discusión en la esfera pública chilena exhibe un consenso amplio sobre la prioridad del mercado en la promoción del crecimiento económico como única forma de generar empleo y, de este modo, combatir la pobreza. Partir de los debates observados en la prensa chilena nos permitirá analizar las inflexiones que asume este tópico en otros contextos nacionales, donde la centralidad del mercado como asignador de recursos y sus efectos distributivos encuentran mayores cuestionamientos.

Durante el período seleccionado, el tratamiento del problema de la pobreza en los principales periódicos chilenos se desarrolla en el marco de las discusiones que dispara la publicación, el 8 de junio de 2007, de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) por parte del Ministerio de Planificación (Mideplan). De acuerdo con los resultados, entre 2003 y 2006 la pobreza se redujo de 18,7 % a 13,7 %; sin embargo, el 15 % de la fuerza laboral –1 millón de trabajadores– se encuentra por debajo del sueldo mínimo y casi dos millones permanecen por debajo de la línea de pobreza. Dadas estas cifras, la discusión sobre la pobreza como fenómeno social en Chile estará atravesada por el problema de la desigualdad en la distribución del ingreso y, consecuentemente, por el rol que debe asumir el Estado para la reducción de esa brecha. En definitiva, de una manera mucho más clara y directa que en otros países relevados donde también está presente el eje Estado-merca-

do, como Perú, Argentina, Venezuela y Bolivia, lo que aparece en el centro del escenario mediático en Chile respecto del problema de la pobreza, es una discusión acerca de la evolución del modelo de desarrollo que Chile implementó desde la dictadura de Augusto Pinochet y que generó, mediante tasas de crecimiento económico excepcionales para la región, tanto una reducción de la pobreza en términos relativos como un aumento alarmante de la desigualdad distributiva.

En este contexto, surge como eje dominante de la discusión el problema de cómo incrementar el ingreso de los trabajadores menos calificados, el sector social que aparece como núcleo duro de la pobreza, sin afectar el dinamismo del mercado ni su capacidad de distribución de recursos. Una intervención de la Iglesia, foro moral de la discusión en todos los medios relevados, apelando a la ética y responsabilidad empresarias frente a los resultados de la CASEN, generó un interesante debate acerca de la justicia distributiva y el rol que deben asumir el Estado y los empresarios frente a una situación que combina crecimiento económico sostenido y extrema desigualdad. Poco después de la publicación de los resultados de la encuesta CASEN, los medios recogen declaraciones de obispos alarmados por los efectos de la desigualdad y la pobreza sobre la dignidad humana y la paz y seguridad de las familias.

Claramente, el problema de la pobreza en los medios chilenos se organiza según distintos criterios de política económica que confrontan al gobierno, por un lado, con los empresarios más concentrados y la oposición política, por el otro. Cabe subrayar, aun antes de presentar las posiciones, que la voz de los trabajadores organizados queda prácticamente excluida de una disputa que les afecta directamente. Como queda reflejado en el Cuadro 3, con la parcial excepción de los casos de Argentina y Perú, la ausencia de los sindicatos en el debate sobre la pobreza es una constante en los medios de la región

El Mercurio, el más tradicional y prestigioso de los diarios chilenos, opera en el debate como acérrimo defensor de “el modelo” chileno rescatando, entre otras ventajas, el incremento sostenido del PBI nacional que le permitió a Chile alcanzar en la actualidad el primer lugar en Latinoamérica en cuanto a ingreso *per cápita*, la mencionada reducción de la pobreza y las altas tasas de inversión externa. Es notable la capacidad que muestra este diario para definir la agenda pública chilena obligando a otros actores, tanto políticos

como mediáticos, a intervenir sobre los temas publicados en sus páginas. Uno de esos temas, fundamental para nuestro interés en el tratamiento de la pobreza durante el período estudiado, es la propuesta de “salario ético” presentada por el opositor Sebastián Piñera, perteneciente al partido Renovación Nacional (RN) y candidato presidencial derrotado en las últimas elecciones. Ante la propuesta del gobierno de establecer un salario mínimo y regulaciones a la jornada laboral, con el fin de atacar la brecha distributiva que tensa la discusión sobre la pobreza en Chile, Piñera salió en defensa de la libertad de empresa proponiendo que en los casos en que las empresas no puedan garantizar un umbral de ingresos mínimos por ver resentida su competitividad, debe ser el Estado el que subsidie la diferencia.

La propuesta generó un intenso debate del que participaron profusamente los editorialistas y colaboradores del *Mercurio* rescatando el valor moral de las intenciones de Piñera, pero cuestionando la eficiencia de la medida por desincentivar el esfuerzo personal del trabajador al asegurarle el ingreso mínimo, corriéndose el riesgo de estimular una “cultura de dependencia”. Desde la perspectiva del diario, las políticas sociales contra la pobreza deben centrarse en favorecer el crecimiento económico, desregulando mercados y flexibilizando el trabajo, por un lado, y mejorar la calidad y cobertura de los servicios de capacitación y educación, por el otro. Tanto los programas sociales de alcance universal como las regulaciones al mercado de trabajo se presentan como “ilusiones populistas” que terminan desfavoreciendo a aquellos que pretenden beneficiar, en la medida en que obstruyen el crecimiento económico y generan una burocracia estatal desmesurada e ineficiente que devora la mayoría de los recursos que administra. Por supuesto que la sanción de un salario mínimo protegido por ley también resulta objeto de las más furibundas críticas dado que las empresas, al ver reducida su competitividad, tenderán a despedir a los trabajadores menos calificados aumentando el desempleo y agravando la desigualdad en la distribución del ingreso. En todo caso, se propone, el Estado debería garantizar un importante seguro de desempleo a cambio de una mayor flexibilización de las relaciones laborales que reduzca los costos empresariales.

Como se ve, en el caso de la prensa chilena la pobreza aparece ligada a una fuerte discusión ideológica sobre la evolución del modelo de desarrollo nacional, en la cual *El Mercurio* reitera sus cuestionamientos tanto al Esta-

do benefactor como a la “ética socialista”: “Los éticos socialistas nunca pondrán terminar con el derroche fiscal, para redirigirlo hacia los pobres en un chequecito mensual. Para curar sus males mentales y dormir bien, pondrán, en cambio, subir los impuestos, partiendo por el IVA come pobres, y gastar más en educación, salud y unos 10 mil ‘servidores públicos’ de pobres, algo que ahora sí funcionará. Para los socialistas, se trata de quitarles a los ricos y no de ayudar directamente a los pobres con cheques y oportunidades. Esto último suena a ‘neoliberalismo’, satanización con la que pretenden descalificar al liberalismo, de gran éxito reciente, después de la ruina socialista-comunista y el éxito del capitalismo. A ellos no les preocupan las políticas proteccionistas que gravan a los pobres en favor de los ricos y del fisco, al encarecer el azúcar, el trigo, la harina, el pan, la bencina, el alcohol, los refrescos, autos y ropas usadas, el crédito popular y otros bienes como la carne argentina o la leche. Menos les importa el costo de las casas populares, inflado por las restricciones al tipo de vivienda, el límite a las ciudades y a la altura de los edificios o los costos de notarios y conservadores”.¹² Si la pobreza queda enmarcada en una discusión de política económica, la política social queda reducida a una nociva intervención estatal que tranquiliza la buena conciencia de los socialistas, por un lado, pero aumenta las estructuras burocráticas y clientelares de un Estado ineficaz que ahoga el crecimiento económico y reproduce la cultura de la dependencia, por el otro.

En el extremo opuesto del arco político, el diario *La Nación* aparece como defensor de las posiciones del gobierno. Fustigando persistentemente a “la derecha”, el contradestinatario que construye y que está conformado por políticos opositores, empresarios con participación pública y su tribuna: *El Mercurio*; *La Nación* se enfoca en defender abiertamente las políticas del gobierno operando como órgano de difusión del pensamiento de sus funcionarios. Si “la derecha” propone que el crecimiento económico tiene un efecto automático sobre la reducción de la pobreza, *La Nación* destaca la importancia de un rol activo del Estado en la implementación de programas sociales. Se reivindica la importancia de una intervención del Estado capaz de acompañar y fortalecer a las familias vulnerables a través de asistencia en educación y salud, las políticas activas orientadas a resolver el problema de la vivienda

12 “Huevo ético”, *El Mercurio*, 13/9.

–rasgo marcado en la caracterización de la pobreza en Chile–, y los esfuerzos del gobierno por reducir la brecha distributiva. Más allá de su prédica contra las recetas neoliberales de “la derecha”, *La Nación* no aparece proponiendo un modelo de desarrollo alternativo al de la apertura económica y la flexibilización laboral, sino rescatando la importancia del Estado como garante de la integración social, a través de distintos sistemas de protección focalizados en los sectores más vulnerables.

En ambos medios se registran dos voces autorizadas que permiten fundamentar los argumentos en disputa. Como ya mencionamos, la iglesia católica aparece como el horizonte moral de la discusión sobre la pobreza, interpelando a los actores políticos y económicos desde una posición de autoridad ética incontestable. Como en la generalidad de los casos estudiados, por otro lado, los organismos internacionales de crédito y evaluación de políticas sociales, como el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), inciden en la discusión bajo el presupuesto de autoridad técnica indiscutible que avala los argumentos de las partes. Si *El Mercurio* recurre a estas fuentes para mostrar cómo un país Latinoamericano puede abrir su economía al comercio internacional y reducir la pobreza, *La Nación* lo hace para exhibir las evaluaciones favorables de los programas sociales implementados por los gobiernos socialistas que “la derecha” cuestiona por ineficientes y regresivos. Ambos medios, a tono con la tendencia general en la región, coinciden en vincular a la pobreza con las políticas proteccionistas de los países desarrollados que obstruyen el comercio internacional, difundiendo las apelaciones de los organismos multilaterales como la ONU y la OEA a favor de un comercio internacional más justo.

Al momento de identificar las causas de la pobreza, *El Mercurio* insiste con los efectos distorsivos que las regulaciones e intervenciones del “Estado de Bienestar” generan sobre la dinámica del mercado y, consecuentemente, sobre el crecimiento económico. La ecuación reiterada como receta para salir de la pobreza consiste en favorecer la productividad empresarial como disparador del crecimiento que, a su vez, generará más empleo y mejores salarios. En este marco, el problema de fondo para la erradicación de la pobreza resulta la baja productividad de muchos trabajadores, resultante de la insuficiente e ineficiente inversión en capital humano. En términos económicos y morales, la educación y la capacitación aparecen en el discurso de

El Mercurio como las herramientas principales para combatir la pobreza por parte del Estado. Entre las propuestas, al respecto, se sugiere la privatización total de la educación media y superior alegando que su administración pública subsidia a los pudientes dificultando el acceso a los pobres. El planteo en términos de derecho universal a la educación se presenta como otra patraña de una ética socialista hipócrita, que se muestra como defensora de los pobres para concentrar los recursos en la administración pública y la burocracia estatal.

Otro foco de debate durante el período relevado lo constituye el conflicto laboral originado en la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), donde un grupo de trabajadores, apoyados por la Central Única de Trabajadores de Chile (CUT), procedió a una serie de medidas de fuerza cuestionando las formas de subcontratación a las que recurre la empresa para evadir cargas laborales y reducir salarios. En el marco de este conflicto, el gobierno propuso una ley que regule las subcontrataciones y permita la negociación colectiva en unidades mayores que la propia empresa. El argumento del gobierno de Michelle Bachelet, apoyado y difundido por *La Nación*, consistía en que una mayor capacidad de negociación de las organizaciones obreras, sumado a la conformación de una comisión legislativa contra la desigualdad con participación empresarial y sindical, contribuirían a enfrentar el problema de la pobreza resultante de la brecha de ingresos reflejada por la CASEN. Desde la perspectiva del *Mercurio* y de los diarios económicos de Chile, la propuesta fue calificada como una peligrosa politización de las relaciones laborales que, nuevamente, tendría el efecto indeseado de afectar a quienes pretendía favorecer.

Para *El Mercurio*, estos intentos de “ingeniería social” favorecen a los trabajadores empleados con salarios protegidos, corporativizando las relaciones laborales y postergando los intereses de los realmente pobres: los desocupados y trabajadores de baja calificación. Sólo la libertad de trabajo genera productividad en la medida que permite ajustar los salarios a la dinámica del mercado de manera individual o en el nivel de la empresa. Pautar las negociaciones de manera centralizada privilegia a los trabajadores organizados por sobre los que no lo están –los verdaderamente pobres– y concentra poder y recursos en las cúpulas sindicales. Incluso el régimen de subcontrataciones se justifica como la estrategia que permite a las em-

presas, principalmente las de menos recursos, mantenerse competitivas en un mercado globalizado de alta volatilidad. Al extremo, el intento del gobierno se presenta como un ataque a la democracia representativa, dado que pretende sustituir la representación parlamentaria de partidos por la representación de intereses sectoriales de corporaciones. En un editorial por demás significativo, el tradicional periódico chileno lo pone en estos términos: “Al parecer, se mantendrá la muy reducida participación laboral que hoy se observa en Chile, por la ofensiva insinuada por algunos partidos y dirigentes gremiales, que se aprestan a configurar una suerte de consejo económico social. Apoyan esta idea pensadores de la izquierda tradicional y organismos sindicales, encabezados por la CUT. De concretarse tal instancia, ella limitaría seriamente la libertad de trabajo y se configuraría una modalidad de organización corporativista que, de hecho, reemplazaría parcialmente al Congreso y a los partidos políticos, como se observó en la Europa occidental anterior a la Segunda Guerra Mundial y, en algún grado, en el Chile del gobierno militar, antes de la modernización laboral. Pero la experiencia de diversos países avanzados muestra que es un error creer que no resulta políticamente posible enfrentar el populismo laboral. La mayor libertad de trabajo promueve el desarrollo, el pleno empleo y la completa participación laboral, en especial de los más pobres. Si no la hay, estos últimos tendrán que seguir esperando, mientras se ayuda a las cúpulas sindicales, que presionan a favor de legislar para entregar favores a los trabajadores bien organizados, con empleo permanente y con salarios comparativamente elevados”.¹³ Como se ve, el argumento contra el “populismo laboral”, y a favor de la “modernización laboral”, insiste en las ecuaciones de política económica para enfrentar el problema de la pobreza sin dar lugar a ningún tipo de reclamo vinculado a los derechos laborales y la protección social.

Si se pretende ayudar a los pobres, pontifica *El Mercurio*, el Estado representativo debe reducirse a una estructura judicial y policial que garantice el cumplimiento de la libertad de contratación entre individuos, confiriéndole al mercado la capacidad de distribuir recursos. Toda forma de intervención estatal más allá de estos límites se considera una forma de violencia sobre

13 “Politización laboral”, *El Mercurio*, 3/7.

las libertades individuales y los esfuerzos personales cuya promoción es la única garantía para superar la pobreza.

En el discurso predominante en los medios chilenos, el pobre resulta de esta forma un individuo pasivo y afectado por las malas políticas públicas que lo condenan a la ignorancia, la precariedad laboral y la cultura de la dependencia. Las políticas de protección y promoción social se representan como formas de dilapidar recursos, desincentivar el esfuerzo personal y reproducir la burocracia estatal. Los sectores sociales que el mercado no puede integrar deben asistirse con transferencias directas de ingresos a grupos específicos y con la reiterada apelación a la solidaridad y responsabilidad empresarial. La pobreza queda recortada, de esta forma, como un problema de política económica, por un lado, y como una cuestión moral que interpela las conciencias solidarias de la nación cristiana, por el otro. Sólo marginalmente, incluso en los medios más cercanos al gobierno socialista, se plantea el problema de la representación y participación organizada de los desposeídos en la definición de políticas capaces de reducir la alarmante brecha de ingresos que divide al país.

El tema de la relación de los empresarios con la pobreza parece haberse instalado también en el debate de buena parte de la prensa latinoamericana. Los diarios de Chile, Venezuela, Argentina, México, Perú y Brasil dan cuenta de una problemática que coinciden en definir como la “responsabilidad social empresaria”. En muchos casos, principalmente en *El Mercurio* de Chile, *La Nación* de Argentina, *El Comercio* de Perú o *Reforma* de México, la cuestión se limita a una apelación moral a los empresarios compeliéndolos a distintas prácticas filantrópicas destinadas a colaborar en el combate contra el flagelo de la pobreza. En ocasiones, los diarios de centroizquierda como *La Jornada* en México o *La Nación* en Chile, sugieren que el interés empresario por participar en el combate contra la pobreza encubre la presión de éstos por conseguir beneficios y desgravaciones para las empresas que, en sí mismas, o a través de fundaciones, participen de la causa antipobreza. De hecho, tanto en México como en Chile, existen proyectos de ley sobre donaciones que apuntan a estimular la participación empresaria.

Ahora bien, la responsabilidad empresaria adquiere otra inflexión en México y Venezuela a través de *La Jornada* y *El Nacional*, respectivamente. En Venezuela, de la mano de la promocionada visita del premio Nobel de

economía Muhammad Yunus, agasajado con la Orden del Libertador del país por el presidente Chávez, la cuestión de la responsabilidad social empresarial toma la forma de buscar alternativas para generar mercados entre los pobres a través de microcréditos y microseguros para pequeños productores comunitarios. El diario venezolano en una columna titulada “Inclusión social”, expone el siguiente argumento, representativo de este nuevo discurso sobre la responsabilidad de las elites empresariales y muy presente en la prensa latinoamericana, en el combate a la pobreza: “La realidad es que los gobiernos por sí solos no podrán solucionar el problema de la pobreza y de la exclusión asociada. Si las empresas no toman conciencia de que vivir en “burbujas” de bienestar, rodeadas de anillos de pobreza, a la larga las dejará solas en sus burbujas, sin tener a quién proveerles sus bienes y servicios, sus negocios colapsarán por falta de sustentabilidad. (...) La estrategia empresarial y la buena gerencia deben contener de forma explícita el compromiso con la inclusión social y reflejarse en sus planes y presupuestos, moviéndose con mayor profundidad hacia el desarrollo endógeno y la sustentabilidad. El tema social no es una moda gerencial más; llegó para quedarse y debe ser internalizado por los gerentes y empresarios para convertirlo en el mejor de sus negocios”.¹⁴

Asimismo, los principales ejecutivos del BBVA, la entidad financiera que aparece más vinculada al problema de la pobreza en toda la región, señalan las ventajas de desarrollar servicios financieros para sectores pobres con el objetivo de favorecer los microemprendimientos y generar una cultura del ahorro y la inversión. Del mismo modo, en Perú, el BBVA ganó mucha presencia durante el período anunciando programas de responsabilidad social y apuestas comerciales de inclusión de nuevos segmentos al mercado bancario en virtud del peligro para la “cohesión social” que significa permitir que se ensanche la brecha entre pobres y ricos.¹⁵

El contraste entre crecimiento económico sostenido y la exclusión de amplios sectores sociales de los beneficios de esa bonanza, estructura la discusión del tema de la pobreza en la prensa peruana. El contexto internacio-

14 Benjamín Tripier, “Inclusión social”, *El Nacional*, 19/9.

15 “BBVA se alista a captar nuevos clientes de segmentos medios y bajos”, *Gestión*, 23/5; Francisco Melgar, “Juntos podemos leer mejor”, *El Comercio*, 27/6.

nal favorable es particularmente notorio en este caso. El país lleva, y aparece reiteradamente destacado en el discurso periodístico, más de 70 meses continuados de crecimiento, beneficiado por los precios de sus *commodities* exportables. Pero la prensa también construye un cuadro negativo en lo que hace a los efectos sociales de esa bonanza en la economía. Las cifras sobre pobreza siguen inmovibles y el crecimiento por sí mismo no parece operar la esperada reducción de la pobreza. Un sector mayoritario de la población se encuentra al margen, en la informalidad, el subempleo y el autoempleo. No hay controversia al respecto, pues surge de datos autorizados del Estado y de organismos internacionales.

La prensa acerca también informes sobre un clima de descontento con protestas y huelgas, reportes de algunos episodios de violencia y encuestas de opinión que reflejan que “en la calle” no se sienten los efectos de la expansión. El contraste entre economía y clima social dispara así una discusión pública sobre el rol del Estado y el mercado de cara a la cuestión social de la pobreza.

El 28 de julio, Día de la Independencia nacional, es una ocasión discursiva institucionalizada en la que el presidente de la República da un discurso ante el Congreso. En las semanas previas, las columnas estaban cargadas de expectativas de anuncios programáticos o señalizaciones de rumbos de políticas públicas que se esperan del presidente Alán García. Adicionalmente, el evento oficial coincide con el primer aniversario del gobierno de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA). Cada medio propone alguna ecuación de balance y expectativas.

En una columna editorial, *El Comercio*, el diario más tradicional de Lima, espera que se mantenga la “prudencia macroeconómica” que considera un logro destacable. Alerta también sobre viejos sectores del APRA, que amenazan el rumbo político pretendiendo “resucitar las prácticas vedadas de clientelismo y copamiento”. Urge, en cambio, reducir el tamaño del aparato estatal, el cual, según el diario, debe seguir siendo manejado con criterios técnicos. Frente a la “enorme deuda social” critica como lenta y desordenada la respuesta gubernamental. El asistencialismo, provisoriamente necesario, no debe convertirse en finalidad, según el periódico. El combate contra la pobreza, se lee en *El Comercio*, debe descansar en dos ejes: por un lado, capitalizar y relanzar las con-

cesiones privadas con las que se pueda comunicar a los peruanos del interior y abrirles la puerta del mercado. Por el otro, considera vital reducir sobrecostos laborales y burocráticos para combatir el subempleo y la informalidad.¹⁶ Las voces que se escuchan en *Gestión*, el diario que se propone expresar el punto de vista empresarial respecto de los asuntos públicos, no difieren demasiado de esa mirada. Por su parte, *La República* hace oír posiciones alternativas que consideran un “insulto moral” pretender superávit fiscal de cara a la situación social, advirtiendo que no debe esperarse el efecto derrame del auge de los sectores ligados al mercado exportador.

En síntesis, el imperativo de “la reducción de la pobreza” aparece como algo compartido e instalado en la agenda pública. En su discurso, Alán García propone como la prioridad de su gobierno la reducción de la pobreza rural del 70 al 45% dentro del período de su mandato. El otro eje de su discurso es la firma de un amplio pacto social de características difusas. Con esta enunciación de metas generales, el discurso del Día de la Independencia despierta en consecuencia todo un despliegue de reacciones en la arena pública sobre los problemas de la pobreza rural, los salarios y la informalidad.

Llama la atención en el caso peruano que la pobreza, como se advierte en la alocución presidencial, está definida en términos de pobreza rural. Fuera de la caracterización de los damnificados del terremoto de Ica como predominantemente pobres, casi no aparece durante el período una tematización de problemáticas de pobreza urbana. La excepción es una nota que reporta sobre la situación habitacional de 4.000 familias en los asentamientos de emergencia de Lima.¹⁷

Al anunciar el pacto social, el discurso presidencial genera en sectores sindicales expectativas en términos de una posible regulación de un salario mínimo. Ello desata fuertes críticas desde los “analistas” económicos y los sectores empresarios que consideran ilusoria y contraproducente la idea de pactar salarios. De manera idéntica a los argumentos que refleja la prensa chilena, regular el salario por encima del equilibrio de mercado afectaría la creación de empleo formal ya que al elevar sus costos, se estaría incentivan-

16 “Entre el azul económico, el rojo en gestión y el ámbar social”, *El Comercio*, 26/7.

17 *La República*, 15/8.

do la reproducción de un mercado informal y, por ende, la propia pobreza. “La informalidad, en todas partes del mundo, es causada por malas leyes y exceso de regulaciones”. Consecuentemente, estas posturas reclaman modificaciones a la regulación del trabajo que lo flexibilicen y destraben costos. Si no se hace esto, los empresarios buscarán plazas más rentables o reemplazarán empleo humano por automatización. Pactar salarios por encima del mercado, en esta lógica argumental, no acelera la reducción de la pobreza, sino todo lo contrario.¹⁸ La peculiaridad de estas voces que *El Comercio* y *Gestión* presentan como “analistas” o “especialistas”, consiste en que no son en general técnicos o economistas académicos, sino, predominantemente, representantes del mundo empresarial y consultores de negocios.

En contraste, *La República* permite vislumbrar otras posiciones desde sectores más críticos del modelo de mercado. Así se reflejan allí voces discrepantes como la de allegados políticos de Ollanta Humala, voces sindicales que critican la política de andariveles separados de fomento al mercado y asistencialismo sin reforma estructural, y otros intelectuales, académicos y periodistas que –sin adscribir por ello a una matriz estatista– advierten sobre fallas e insuficiencias del mercado como remedio a la cuestión social.

El descontento público y la decepción frente a los resultados sociales activan también toda una serie de preguntas sobre el impacto de las cifras económicas en la estabilidad y el equilibrio político del Perú. Los temores por la cohesión social parecen reactivarse en Perú a la par de la movilización, la protesta social y las huelgas –acompañadas de episodios de violencia– que atraviesan el período. Bajo la premisa de que existe algún tipo de relación entre alivio de la pobreza, paz social y gobernabilidad, las voces que se articulan en la arena de los medios se preguntan sobre compatibilidad entre democracia y desigualdad.

En el diario *Gestión* numerosas voces del sector empresarial, consultores, bancos y la representación formal del empresariado en la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), se alarman frente a la activación de protestas sociales. Las consideran comprensibles en el mar-

18 “Salario mínimo no elimina la pobreza”, *Gestión* 15/8; “¿Acelerando la reducción de la pobreza?”, *Gestión*, 1/8.

co del resentimiento que genera la exhibición de una economía floreciente en contraste a la falta de derrame; sin embargo, señalan al gobierno la obligación de actuar con firmeza e imponer el principio de autoridad y exigen “meter presos a los cabecillas de la violencia” como medida ejemplar. Dado que las pretensiones distributivas no se corresponden con la “baja educación de la fuerza laboral” y las posibilidades reales del mercado de trabajo, hacer lugar a esos reclamos daría lugar a oportunidades de populismo y radicalidad que son “un riesgo para la democracia y el estado de derecho”.¹⁹

Las voces que se expresan en *El Comercio* y *Gestión* reconocen la tensión y alertan sobre el riesgo “populista” de pretender igualar obviando la lógica económica. *La República* articula, en contraste, voces que colocan el problema en términos diferentes. Un economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) advierte que el gobierno se equivoca al supeditar y reprimir todo reclamo de cara al imperativo de atraer a la inversión privada extranjera. De otro modo se estaría violando el principio democrático: “La democracia no es tal si no sirve de balance al mayor peso del dinero”. En otro artículo, dedicado a Amartya Sen, se destila la misma idea de democracia como imposibilidad de desautorizar y acallar voces sociales en función de un imperativo tecnocrático. Un sociólogo compara las bases de apoyo de los últimos gobiernos peruanos: “Si Fujimori gobernó para los ricos, con el apoyo de los pobres y la oposición de la clase media, García también gobierna para los ricos pero con el apoyo de la clase media y la oposición de los pobres”. El autor recuerda las definiciones de Albert Hirschman y Julio Cotler sobre la democracia como capacidad de esperar el turno y advierte “que los estratos populares se cansaron de esperar y de hacer cola”. El riesgo de la ingobernabilidad y la alternativa de caer en extremos autoritarios sólo pueden ser sorteados por medio de un pacto social.²⁰

19 “CONFIEP: Triunfalismo económico del gobierno sería una de las causas de convulsión social”, *Gestión*, 13/7; Elmer Cuba, “El milagro peruano y las protestas sociales”, *Gestión*, 17/7.

20 José Oscátegui, “Los idus de julio”, *La República*, 24/7; Enrique Patriau, “El rostro humano de un economista”, *La República*, 16/4; “Régimen económico liberal genera conflictos sociales en el país”, *La República*, 9/7; Sinesio López, “El Zorro de Abajo. La democracia en cuestión”, *La República*, 10/8. Desde una posición similar, otro columnista se pregunta sobre el balance de la desigualdad del mercado con la exigencia de igualdad

Decíamos más arriba que en Perú la pobreza aparece caracterizada como un fenómeno típicamente rural. *El Comercio* y *Gestión* exponen puntos de vista predominantemente económico-tecnocráticos, en los que el gobierno central y los gobiernos locales deben crear un clima de inversión favorable, reducir los costos de transacción en infraestructura y servicios, y permitir que los campesinos, mayoritariamente en situación de informalidad, se integren al mercado. Como ejemplo, una columna firmada presenta las opiniones de tres economistas de la Universidad del Pacífico, a las que se suma la voz del presidente de la cámara empresarial peruana. Todos coinciden en que el gasto social, más allá de su aplicación eficiente y correctamente focalizada, debe estar acompañado de una política que atraiga inversión privada, genere reducción de costos a través de servicios y potencie, a la vez, educación, nutrición y agricultura para ampliar el acceso al mercado laboral.²¹

Las voces dominantes en la prensa peruana hablan de la falta de integración de las mayorías campesinas como sujeto de mercado. Según el economista Pablo Secada, el crecimiento no alcanza al pobre de la sierra “porque éste está totalmente desintegrado del mercado interno y mucho más del internacional, porque no habla castellano, porque lo que produce no se lo puede vender a nadie”, falta infraestructura, caminos, servicios y comunicación. Aquí se ve una definición de la pobreza como fenómeno resultante del tradicionalismo propio de las zonas rurales, cuyas pautas de comportamiento comunitarias obstruyen el desarrollo económico necesario para su inserción en el mercado y su consecuente salida de la pobreza. Este tópico aparece también en los casos de la prensa de Bolivia y México aunque, en este último, con una modulación diferente asociada a los derechos de las poblaciones indígenas y el respeto de sus tradiciones.

Venimos mostrando la discusión sobre las estrategias de mercado para salir de la pobreza en la región. Chile constituye el caso de mayor consenso y articulación de estos argumentos en la prensa. En Perú, si bien la discusión se enfoca en el problema del empleo y el mercado como respuestas a la problemática social, aparecen, sin embargo, algunas voces que presentan reparos a los supuestos

del Estado y sobre la posibilidad de hacer compatibles capitalismo y democracia, sin caer en matrices estatistas ineficientes o en desigualdades socialmente intolerables, Baldo Kresalja, “Las Próximas Batallas. El lujo democrático”, *La República*, 16/8.

21 Luis Corvera, “Metas claras, ruta por definir”, *El Comercio*, 30/7.

efectos sociales del crecimiento reivindicando un rol más activo del Estado en la regulación del mercado de trabajo y la distribución del ingreso. Finalmente, México nos muestra el caso de una prensa, excepto en lo que respecta al periódico económico *El Economista*, fuertemente crítica de las políticas de mercado atribuidas al régimen político mexicano durante las últimas dos décadas.

Según estadísticas del Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo (Coneval), órgano descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Social, en México más de 18 millones 790 mil habitantes, es decir 18.2 % de la población del país, sufren de “pobreza alimentaria”; quienes la padecen no alcanzan a cubrir los mínimos para comer y nutrirse. El 24,7 % de los habitantes –25 millones 950 mil mexicanos– padecen “pobreza de capacidades”, es decir, insuficiencia del ingreso para adquirir la canasta alimentaria y pagar los gastos en salud y educación. Y 49,7 millones sufren “pobreza de patrimonio”, lo que significa que uno de cada dos habitantes del país se encuentra en esta situación que afecta a la vivienda y los servicios públicos de infraestructura y hábitat. En Chiapas y Guerrero, las entidades con mayores carencias con economías predominantemente rurales y habitadas por indígenas, 70% de sus habitantes son pobres.

Pero no sólo la pobreza nutre la agenda de los periódicos aztecas. Luego de 10 años los mexicanos recuperaron el ingreso que tuvieron en 1994. En ese año, la denominada “crisis del tequila” provocó una reducción del PBI en 6,2 por ciento. Más grave fue la reducción del ingreso de las familias: cayó 28 por ciento entre 1995 y 1996. Durante la década siguiente, los grandes ricos mexicanos multiplicaron notablemente su patrimonio, apareciendo en los primeros lugares entre los más ricos del mundo. Es el caso del empresario Carlos Slim, recurrentemente referido por el diario de centro izquierda *La Jornada* como símbolo de la desigualdad y adalid de la ética empresarial mexicana. Desde que se ubicó en los primeros lugares de la lista de Forbes, se informa trimestralmente de la evolución de su situación patrimonial. Es de dominio público que actualmente su riqueza alcanza 60 mil millones de dólares, lo que equivale al 7.2 por ciento del PBI del país.

Según *La Jornada*, la recuperación de los niveles de ingreso del país se realizó a costa de la concentración monopólica de una serie de áreas estratégicas en manos privadas, nacionales y transnacionales, que controlan los mercados fijando discrecionalmente los precios en connivencia con un régimen político viciado por la corrupción. Las políticas monetaristas de reducción del déficit fis-

cal, llevadas adelante por los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) primero, y por el Partido Acción Nacional (PAN) posteriormente, completan el cuadro de la actual situación de pobreza resultante de la concentración del ingreso producida durante el período de “políticas neoliberales” que el diario fustiga con ferocidad. Invocando informes del Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el periódico mexicano, fuertemente crítico del gobierno de Felipe Calderón, identifica como causa de la persistencia y ampliación de la pobreza en el país a la desigualdad generada por la mencionada connivencia entre empresas monopólicas y gobiernos neoliberales. A mayor desigualdad, se argumenta, menor es la incidencia del crecimiento del producto sobre los ingresos de los sectores más postergados de la población. Ante la carencia de políticas sociales efectivas por parte de un Estado capturado por los grandes intereses económicos y financieros, el crecimiento económico no hace más que aumentar la “descomunal” brecha de ingresos proyectando la desigualdad a todos los aspectos del desarrollo humano.

Es así que las cifras que muestran la recuperación del ingreso *per cápita* conviven con los alarmantes indicadores de pobreza anteriormente señalados. Tanto *La Jornada* como *Reforma* coinciden en señalar que una de las principales consecuencias de esta situación de extrema pobreza consiste en la intensificación de las migraciones de ciudadanos mexicanos a los EE. UU. en situación de ilegales, exponiéndose a trabajar en condiciones indignas. Según cifras publicadas en los periódicos, el 40% de los ingresos de las familias más pobres se compone de remesas sumadas a donaciones y a las transferencias directas del Estado. También la falta de empleo incide sobre las migraciones que no sólo afectan a los sectores más vulnerables; según consignan los medios la falta de oportunidades laborales resultante de la debilidad del aparato productivo, genera que casi el 40% de los desocupados del país sean profesionales o personas con experiencia laboral previa.

Al momento de identificar las causas de la pobreza en el país el diario *Reforma*, con una línea editorial de corte liberal, apunta también a la concentración monopólica de la economía, argumentando que obstruye la competencia y dificulta el crecimiento económico. Asimismo, la desigualdad aparece como principal causa de la persistencia de la pobreza, pero en este caso no se la relaciona directamente con los ingresos, sino con las perversiones de un régimen político capturado por intereses fácticos sin mediaciones institucionales: “De

otro lado, las desigualdades exacerbadas en la distribución del ingreso suelen estar asociadas con un acceso diferenciado a los recursos políticos. Ello a su vez implica que el acceso privilegiado de la élite económica a las instancias de decisión política tiende a reproducir la distribución del ingreso ya existente”.²²

Además, advierten *Reforma* y el diario económico *El Economista*, este último mucho más cercano a los intereses de los empresarios más poderosos, la reducción de la pobreza sólo puede lograrse estimulando el crecimiento económico que requiere de una urgente reforma fiscal. Los empresarios admiten que ante la situación crítica que vive México en términos de pobreza y marginalidad es importante establecer un impuesto único a las empresas. A cambio, solicitan una drástica reducción de la burocracia estatal, la eliminación de los programas sociales que generan “incentivos perversos” que estimulan la dependencia asistencial del Estado, mayor inversión en infraestructura para reducir los costos de transacción de los bienes –principalmente en las zonas rurales–, y el retiro de los subsidios y las regulaciones de precios que afectan las finanzas del Estado y el libre desarrollo de las variables económicas. Asimismo, los empresarios se comprometen a desarrollar negocios con los sectores más vulnerables, a través de la promoción de un sistema de microcréditos y microseguros que financien y estimulen los esfuerzos personales de aquellos realmente interesados en superar su condición postergada.

El tema de la reforma fiscal aparece instalado en los medios por reiteradas declaraciones del propio presidente que, ante la disminución de ingresos fiscales de la renta petrolera, solicita la participación solidaria de la sociedad en el combate contra la pobreza. De lo contrario, advierte Calderón, las consecuencias de la pobreza en términos de inseguridad pondrán en riesgo la gobernabilidad. El problema del incremento de la pobreza y la desigualdad como amenazas a la gobernabilidad democrática y la cohesión social, es una preocupación que también atraviesa el debate en los medios latinoamericanos, como se analiza más adelante.

Hemos recorrido en este apartado las distintas alternativas que la prensa presenta para abordar el problema de la pobreza tomando como eje la relación entre Estado y mercado. Si bien en todos los casos se advierte esta tensión constitutiva, propia de todo régimen capitalista, como hemos visto en

22 Farid Kahhat, “Igualdad, economía y política”, *Reforma*, 4/7.

los casos de Chile, Perú y México la cuestión de la regulación del mercado por el Estado aparece vinculada directamente al propósito de la erradicación de la pobreza. En el caso chileno se verifica un sofisticado debate técnico orientado a lo que podemos llamar una estrategia pura de mercado, dado que la pobreza resulta de las distorsiones producidas por la intervención del Estado sobre la dinámica del mercado y, en todo caso, la controversia se limita al alcance de las compensaciones transitorias que el Estado debe garantizar a los más desfavorecidos. En Perú, el debate se concentra en la intervención del Estado con el objetivo de transformar a los sectores rurales, asociados al tradicionalismo y el atraso como marcas de la pobreza, en un agente económico capaz de dinamizar y participar del crecimiento resultante de los precios internacionales de sus exportaciones primarias. La prensa mexicana, por su parte, muestra la contracara del consenso chileno, allí la pobreza se atribuye a los efectos de concentración monopólica del ingreso y la producción generados por la aplicación de políticas neoliberales que limitaron la participación del Estado como agente recaudatorio y distributivo. El remedio, consecuentemente, debe ser el inverso al planteado en Chile: si se quiere combatir la alarmante pobreza en el país azteca es urgente discutir una reforma fiscal que incluya una importante reestructuración impositiva y una mayor participación del Estado en la economía, sea mediante la protección y promoción de las economías regionales y/o combatiendo la concentración monopólica. En el próximo apartado exponemos otro eje del debate acerca de la pobreza donde esta última aparece como instrumento de una forma de dominación política con una larga tradición en la región: el espectro del populismo.

El fantasma populista: cuestionamientos al uso político de la pobreza

Bolivia es un caso de fuerte polarización entre prensa y gobierno.²³ Este tipo de antagonismo sólo es comparable al del caso venezolano y parcialmente al argentino. Los tres diarios seleccionados para este estudio comparan una posición tajantemente opositora frente al gobierno de Evo Morales. *La Razón*, propiedad del Grupo Prisa, es acusado desde sectores afines al go-

23 *Country Report*, Bolivia, Freedom House, 2007

bierno de defender los intereses de España, en particular de Repsol, por lo cual el presidente Evo Morales tuvo algunos enfrentamientos verbales directos con este medio. *El Deber* de Santa Cruz si bien más balanceado y profesionalista, es “la voz de la Media Luna”, es decir, de las regiones bajas del país, ricas en hidrocarburos y agroexportables, eje de la oposición regional al gobierno de La Paz. *Los Tiempos* de Cochabamba es, de los medios relevados, el más estridentemente opositor al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). Las coberturas periodísticas tienden a estar altamente politizadas en los 3 diarios. El tratamiento de la pobreza en la prensa boliviana está condicionado por este antagonismo. Todas las afirmaciones sobre la pobreza son inteligibles en esta relación político-antagónica.

Con matices que los diferencian, los tres diarios comparten una serie de ejes en los que aparece interpelada la problemática de la pobreza. Todos estos ejes colocan a la política del gobierno como responsable de la reproducción de la misma. Este rol de actor político opositor, más que de arena relativamente neutral, aparece claro no sólo en las notas editoriales sino en todo el espacio de estos medios. Incluso en los espacios destinados a la crónica, predomina la diatriba por sobre la reseña factual.

Las nacionalizaciones y la política de hidrocarburos son la primera cuestión. La argumentación se centra en que el crecimiento económico registrado se debe al aumento de los precios internacionales y se produce a pesar de la política gubernamental. La prueba de ello sería justamente la persistencia de la pobreza. El silogismo común y generalizado es que la inseguridad jurídica, fruto de la política de nacionalizaciones, y las señales equivocadas hacia la inversión, generan pérdida de empleos genuinos y, por lo tanto, pobreza.²⁴

Segundo, dichas políticas equivocadas son atribuidas alternativa o simultáneamente a diferentes causas. En algunos casos parece tratarse de “incapacidad”, “ineptitud” o “inexperiencia” por parte del gobierno;²⁵ pero también son atribuidas a un dogmatismo ideológico de cuño populista con adjetivos como “fundamentalista”, “anacrónico” y “trasnochado”. Según lo ve el diario de Cocha-

24 “Y dónde está el gobierno”, *El Deber*, 16/7; *La Razón*, Editorial del 25/7; “La democracia atormentada”, *Los Tiempos*, 24/7.

25 *La Razón*, 25/7.

bamba: “Hasta aquí hemos tenido un gobierno ideológico, con actos populistas poco prácticos para resolver problemas nacionales y proyectar el camino del desarrollo”.²⁶ Sin embargo, en varias lecturas, la apelación populista no responde únicamente a una visión ideológica del mundo, es atribuida a cierto cinismo instrumental por parte de los “ocupantes” del Quemado. “La dirigencia estatal sigue dándole a la lucha ‘ideológica’ y promoviendo el ‘odio de clases’”, porque de ese modo, acicateando esos prejuicios, conseguiría reproducirse en el poder. Así, cierran al unísono las voces opositoras su razonamiento: lo que sostiene a Evo Morales y sus acólitos en el poder es la propia pobreza con los prejuicios que genera. Por lo tanto, el interés real del propio gobierno no sería combatirla sino reproducirla. En un editorial de *Los Tiempos* el razonamiento es expresado con rencor: “hay más pobreza, y al gobierno le encanta y se aprovecha de ella”, por lo tanto, de él sólo se puede esperar “más pobreza, más hambre, más inseguridad, más muerte, más odio, más racismo, más droga, más sometimiento”.²⁷

Esta visión de los pobres como masa de maniobra pasiva y utilizada, converge en la común acusación al gobierno de operar una peligrosa etnificación de la política. En un editorial del 21 de junio, *La Razón* atribuye al gobierno el aumento de las “diferencias raciales”, el “odio entre las clases sociales”, las “brechas regionales” y la fragmentación del territorio. El periódico de Santa Cruz de la Sierra, por su parte, se referencia, en uno de sus editoriales, en la autoridad del informe de desarrollo humano del PNUD que constata la incorporación de sectores indígenas (equivalentes a pobres) al poder, para mostrar que es el gobierno del MAS el que “racializa” la pobreza para convertirla “en un instrumento de poder”. Esa “utilización política del campesinado”, sigue la nota, explica “los inusuales aires de racismo y nuevas formas de exclusión” que se perciben en el país.²⁸

Coincidiendo en que el gobierno llevaría al país hacia una equivocada vía de “multiculturalismo”, contraria al camino de la modernidad, un columnista de *El Deber* concluye que “no es con lo étnico-cultural que liberaremos a nuestros compatriotas aimaras, quechuas y tupiguaraníes de la extrema pobreza y exclusión social que padecen, sino convirtiéndolos en sujetos de

26 “Punto de inflexión”, *Los Tiempos*, 14/8/07; también: Verónica Ormachea Gutiérrez, “Bolivia debe negociar con la UE”, *La Razón*, 14/6.

27 “¿Con quién cumple Evo?”, *Los Tiempos*, 16/6.

28 “Llegaron para quedarse”, *Los Tiempos*, 2/5.

mercado”.²⁹ Lejos de ver en la movilización basada en la apelación identitaria la construcción legítima de una mayoría electoral que otorga voz a quienes estuvieron sistemáticamente excluidos de representación política, la prensa, en forma unánime, ve la politización de la identidad indígena como la fabricación de un conflicto que minaría la cohesión social, en palabras de una nota, como un acto “piromaniaco”.³⁰

Por último, la crítica generalizada al alineamiento con Venezuela también es juzgada poniendo en juego la problemática de la pobreza. Para la prensa boliviana, coincidiendo con la interpretación muy presente en buena parte de la prensa regional, hay dos opciones en el universo político actual, una moderna y capaz de conjugar crecimiento económico y políticas públicas “serias”, cuyo paradigma, como hemos analizado, lo constituye Chile,³¹ y otra populista: “Hay dos modelos en América Latina, las democracias de mercado y los socialismos del siglo XXI: los primeros progresan y bajan los índices de pobreza; los segundos mantienen a su pueblo engañado y pobre”.³²

En síntesis, en comparación con los medios de los demás países considerados, Bolivia es un caso en el que ciertas tendencias, no necesariamente ausentes en los demás, aparecen exacerbadas. Éstas son: una fuerte carga ideológica y comportamientos más distantes del profesionalismo periodístico, ambas visibles en una representación sin muchas mediaciones institucionales de intereses económicos y sociales específicos que se encuentran a la defensiva.

29 Mario Rueda Peña, “Cuestión clave”, *El Deber*, 15/7.

30 “¿Pirómanos en vez de bomberos?”, *Los Tiempos*, 18/9.

31 En un editorial del 26/7, *La Razón* reporta los datos sobre reducción de pobreza arrojados por la encuesta Casen realizada en Chile, y realiza un contraste tácito con las políticas bolivianas.

32 “Hacia una aventura peligrosa”, *Los Tiempos*, 9/8. Según el publicista José Gramunt, “los ideólogos que mandan decidieron rechazar las ventajas ofrecidas por un Tratado de Libre Comercio con el principal importador, recurriendo a la apergaminada consigna de que el imperialismo nos explota. Y, para llenar el hueco, el Gobierno boliviano se subió al tren de vía estrecha llamado Alba, conformado por las tres grandes potencias económicas de América Latina, Bolivia, Cuba y Venezuela. Esta caricatura de alianza integradora, al cabo de un año de existencia, cerraba el ejercicio con cifras más propias de vendedora de tostadito para distraer al hambre. Habría que conceder el premio Nobel en economía a los genios “cantores del Alba” (por recordar a un conjunto musical más afortunado)”, “Bonanza y estancamiento”, *La Razón*, 25/7.

Así como el debate sobre la pobreza se concentra en la problemática rural en los casos de México, como veremos más adelante, y Perú; Argentina, Venezuela y Brasil son, de los casos estudiados, los que más enfocan la pobreza como un problema urbano. La problemática habitacional y los déficits de infraestructura urbana dominan la caracterización de la pobreza tanto en Venezuela como en Argentina.

En Venezuela, la problemática urbana de la pobreza se presenta de manera más crítica por la crudeza con que la prensa exhibe sus consecuencias de hacinamiento, epidemias, carencia de servicios básicos y precariedad habitacional. Algunos títulos del diario de mayor circulación en el país, *Últimas Noticias*, ilustran estos aspectos: “En Cerro Los Chivos esperan sentados por sus casas”, “En el barrio 19 de Abril falta de todo y sobran las plagas”, “En Carapita 30 viviendas se mueven como gelatina”, “En Bloque 2 de La Vega llueve más adentro que afuera”, “Los drenajes y sumideros no pasan ni un día limpios”, “Otras tres viviendas rodaron aunque ayer no llovió”, etc. El estilo coloquial de los títulos remite a los destinatarios del diario que son los sectores populares que, justamente, padecen los flagelos que el periódico difunde.

El cuadro de la prensa venezolana se agrava por la amenaza plebeya que significan esos pobres que se presentan como un desafío irreverente a la sociabilidad urbana de las principales ciudades del país. Denominados como “indigentes”, “informales” o “invasores”, la caracterización de la pobreza urbana combina la representación de la pobreza como exhibición obscena de la mendicidad en el espacio público ciudadano, subvirtiendo los valores y las buenas costumbres, con el peligro que las disputas entre bandos armados de pobres significa para la seguridad pública. La siguiente crónica publicada en *El Universal* refleja el tono irritado de esta concepción de la pobreza. Invocando opiniones de vecinos el cronista reporta: “Uno pelea todos los días con los mendigos. El domingo uno de ellos me amenazó con un cuchillo porque no le quise cambiar un billete, esta historia ya se está haciendo parte del día a día’, comenta Pineda, quien en tan sólo cinco minutos de conversación vendió dos yesqueros a indigentes que se dedican a consumir drogas cerca del lugar. A pesar de que los habitantes reconocen que el servicio de aseo pasa con frecuencia, los indigentes se dedican a romper las bolsas y dejar la basura en plena acera. De la misma manera, las calles inundadas cuando

llueve, las pasarelas abandonadas y los robos y arrebates forman parte del acontecer diario de los dos kilómetros de esta avenida”.³³

Ahora bien, los pobres no sólo constituyen una amenaza para la seguridad y las buenas costumbres urbanas, sino que, principalmente, se representan como un peligro para la democracia, debido a la politización de la pobreza por parte de un gobierno que interpela a estos grupos desahuciados como posibles sujetos políticos organizados e integrados a la estructura del Estado.

Las Misiones, denominación aplicada a las estructuras estatales encargadas de proveer la asistencia social alimentaria, sanitaria y educativa, adquieren en la prensa venezolana un estatuto ambiguo. Por un lado, registran un valor negativo en la medida en que operan como el brazo político que le permite al gobierno organizar a los pobres en tanto tales, confiriéndoles estatuto ideológico-político y profundizando, de este modo, la fractura social y política que Chávez promueve para afianzar su liderazgo “populista”. Pero, por otro lado, no son pocas las noticias que rescatan las evaluaciones positivas que hacen de las misiones los organismos internacionales que evalúan las políticas sociales como el Banco Mundial o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Como sucede en Brasil con el programa Bolsa Familia, o con los reparos que muchos sectores tienen respecto de la explotación agrícola para la producción de etanol, también en Venezuela la prensa tiende a escindir la crítica interna al uso discrecional de las herramientas de política social, del liderazgo regional que su presidente promueve a través de la difusión de esas mismas herramientas de política pública. Incluso son favorablemente consideradas por la prensa las misiones que el gobierno organiza y financia para asistir a otros países en alto riesgo social como los centroamericanos.

En Argentina, la pobreza rural aparece vinculada a la desnutrición de las comunidades aborígenes de las provincias del norte, a las cuales se las presenta como en estado de absoluto abandono por parte del Estado nacional y los gobiernos provinciales. Como ya constatamos en el caso peruano, el tópico del tradicionalismo como obstáculo a la modernización, entendida

33 Beatriz Cruz Salazar, “Indigencia y desidia le ganan la partida a la Avenida San Martín”, *El Universal*, 19/9.

como integración al mercado de trabajo y el acceso a la política de protección social, completa el cuadro de desamparo con que los dos grandes diarios nacionales, *Clarín* y *La Nación*, representan a estas comunidades rurales.

Si el desamparo, el olvido y el padecimiento son las marcas que delimitan a la pobreza rural en el norte argentino, la pobreza urbana se define, en cambio, por la inseguridad que genera la “favelización” de la pobreza en las grandes ciudades, con sus secuelas de violencia, delito e inseguridad, por un lado, y por el omnipresente motivo de la manipulación que el gobierno ejerce sobre los pobres urbanos a través de los programas de asistencia social, por el otro. A diferencia de la pobreza rural que afecta a comunidades aisladas de, –y abandonadas por–, las estructuras políticas territoriales, la pobreza urbana se presenta como conformada por una base social organizada y financiada por el Estado, dispuesta a movilizarse para presionar públicamente a favor de las políticas y los candidatos oficiales.

Si bien la cuestión de la manipulación política de la pobreza para sostener gobiernos de perfil autoritario y muy baja calidad institucional es un tópico reiterado en la prensa de ambos países, como también sucede en Bolivia, pero con el agravante del componente étnico de las bases sociales supuestamente manipuladas, en Argentina la cuestión de la manipulación de la pobreza se extiende a un agudo debate acerca de la tergiversación de las cifras para medir la pobreza que se registra en el período analizado. Con sorna, los diarios argentinos se refieren durante el período a una pobreza e inflación “oficiales”, los índices publicados periódicamente por la Agencia de Estadísticas Oficial (INDEC), y otra “privada”, las mediciones encargadas a una miríada de consultoras privadas que agitan el fantasma, muy sensible para la sociedad argentina, del aumento descontrolado de la inflación.

La controversia se suscita como consecuencia de la intervención del gobierno al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), organismo autárquico dependiente del Ministerio de Economía, con el fin de actualizar los instrumentos de medición, lo que genera el rechazo y la posterior renuncia de buena parte de sus técnicos más reconocidos. Desde la perspectiva de los grandes medios nacionales, se trata de un doble encubrimiento por parte del gobierno: por un lado, la subvaluación de la canasta básica de alimentos por parte del organismo disminuye artificialmente los índices de pobreza e in-

digencia que se miden con referencia a ella, dificultando la apreciación real del fenómeno de la pobreza y la elaboración de políticas para enfrentarlo. Por el otro, los índices “retocados” ocultan el avance del fenómeno perverso de la inflación que carcome los ingresos y obliga a los trabajadores sindicalizados a negociar salarios sobre una base distinta al real avance de la inflación. En este último punto cabe destacar, como lo mencionamos en el análisis del cuadro de agentes que participan de la problemática de la pobreza en la prensa latinoamericana, presentado en la primera parte, que Argentina es el único país de los analizados donde los sindicatos aparecen como protagonistas del proceso político de la pobreza, como actores relevantes a través de la negociación salarial.

Como también sucede en México con *La Jornada* o en Chile con *El Mercurio*, en cada caso con sus modulaciones ideológicas particulares, es evidente el conflicto frontal entre buena parte de la prensa argentina, principalmente el diario *La Nación*, y el gobierno de Néstor Kirchner. Al discurso productivista del gobierno, que exhibe una vertiginosa reducción de la pobreza asociada al crecimiento del empleo como consecuencia de un Estado activo y regulador de la actividad económica, el tradicional diario argentino opone una cerrada crítica que insiste en la perduración de la pobreza como efecto de la escalada inflacionaria, encubierta y tergiversada por el gobierno, y de la informalidad laboral que afecta a casi la mitad de los trabajadores argentinos. Aun considerando la virulencia de la disputa, que incluye no pocas referencias directas entre los contendientes, es interesante destacar que el tópico de las políticas sociales asistenciales como eje de discusión del problema de la pobreza, omnipresente en 2002 y 2003, parece haberse desplazado a la función del Estado en la promoción del empleo.

La intervención del Estado en la generación de empleo para erradicar la pobreza también es una cuestión que recorre reiteradamente las páginas de los diarios venezolanos. *El Universal*, el diario más tradicional de Venezuela, insiste en cuestionar una política económica que sólo se sostiene en la distribución de la exuberante renta petrolera del país, sin favorecer la competitividad de las empresas, desalentando la inversión privada y la apertura comercial que son las únicas fuentes de empleo genuino. Se señala que la reproducción de la pobreza está vinculada a la inflación, la más elevada de Latinoamérica consigna el diario, que afecta la capacidad de compra y, de este modo, fomenta la

pobreza. Además, el intervencionismo estatal sobre la libre competencia en el mercado, con el propósito de controlar la inflación, tiene como efecto el desabastecimiento y el consecuente encarecimiento de los bienes que pretende proteger en mercados informales. La “mezcla de populismo militar y estatismo neomarxista” de Chávez, según define un editorialista de *El Universal*, desaprovecha la oportunidad generada por la renta petrolera, destinando los recursos a políticas sociales clientelares y generando una burguesía contratista del Estado, la denominada “boliburguesía”, es decir, la burguesía de la revolución bolivariana, que captura al Estado para su propio beneficio sometiendo a los designios políticos del presidente. De tal suerte, el socialismo del siglo XXI aparece a los ojos de los diarios venezolanos como un estatismo capaz de reducir nominalmente los índices de pobreza, vía transferencias directas de ingresos, pero que, al mismo tiempo, desestimula la inversión, provoca inflación y, lo más grave, mantiene la desigualdad en la distribución del ingreso al aumentar el gasto burocrático y concentrar el ingreso en una burguesía parásita del Estado y esencialmente corrupta.

La reaparición del fantasma del populismo en el escenario latinoamericano del nuevo siglo, básicamente promovido, caracterizado y combatido por los medios más tradicionales de países como Bolivia, Argentina y Venezuela, consiste en gobiernos que administran generosos presupuestos fiscales incrementados por condiciones internacionales favorables que, vía la reducción artificial de la pobreza mediante transferencias directas y mercados protegidos, disponen de los excedentes para financiar su permanencia en el poder y generar una casta burocrática y empresarial dependiente del Estado.

Narcotráfico y violencia organizada en el campo y la ciudad: la pobreza como desafío a la soberanía estatal

Si la retórica de la instrumentalización de la pobreza, según venimos analizando, supone el fortalecimiento de estados populistas, los casos de México y Brasil muestran una caracterización de la pobreza como un fenómeno asociado a la debilidad del Estado en su función elemental de garantizar la soberanía territorial. Es interesante, además, observar el modo en que opera en estos casos el eje pobreza rural-pobreza urbana: si en Brasil la amenaza al control territorial se manifiesta en el espacio urbano, la “fave-

la”, en el caso mexicano la amenaza proviene de la penetración del narcotráfico en las comunidades campesinas y de las organizaciones indígenas de base rural.

Existe una distinción de la pobreza urbana y rural como problemáticas diferentes en el tratamiento mediático en Brasil. La imagen de la pobreza rural está fuertemente asociada a las figuras del *sertanejo* o el nordestino. Sequía, escasez, hambre, desnutrición y migración hacia las ciudades son los rasgos que se asocian a estas figuras. En efecto, el propio presidente porta estas marcas en su biografía.

Sin embargo, la mayor atención de la prensa bajo consideración se concentra en las problemáticas de los pobres urbanos.

La palabra “favela” condensa en Brasil la totalidad comprensiva del fenómeno de la pobreza urbana. La favela es aquella porción, bien delimitada y visible en el espacio de las grandes urbes brasileñas, que abarca a la población pobre. Desde sus orígenes las favelas suscitan la imagen de ser ámbitos donde se procrea el delito y la violencia. Sin embargo, en los últimos años, estas asociaciones han ido cobrando nueva forma y dimensión. El crecimiento del negocio del narcotráfico ha dado lugar al establecimiento de “bandas”, “comandos” y “milicias”, todos grupos armados que se disputan el control territorial de las favelas, desafiando la capacidad del Estado como único detentador del uso de la fuerza. En tiempos más recientes, en Río de Janeiro, las acciones de estos grupos armados no se limitaron a disputas internas, extendiéndose también a los espacios urbanos habitados por las clases medias. Choques con la policía, asesinatos arbitrarios en forma de advertencia, o represalias por encarcelamiento de líderes, son algunas de las variedades de estos desbordes que sensibilizaron y crisparon los ánimos de la opinión pública de la ciudad.

En este escenario sería natural conjeturar que la prensa local, siempre sensible al humor y los prejuicios de sus lectores, privilegiará en su cobertura de los pobres urbanos, noticias que se vinculan con la seguridad, la violencia y el delito. Este fenómeno reflejado en los medios y la opinión pública, es el que algunos han llamado “la criminalización de la pobreza”.

Cabe, entonces, interrogar el período considerado en este estudio bajo las siguientes preguntas: ¿Qué encuadres temáticos hacen las notas toda vez que se refieren a las favelas? ¿Hay efectivamente un registro sesgado de la problemática de la pobreza urbana? El siguiente cuadro ordena las coberturas sobre favelas del período según diario y encuadres dominantes.

Cuadro 4: Encuadres temáticos en la cobertura de favelas

	O ESTADO DE SP	O GLOBO
SEGURIDAD/VIOLENCIA	4	7
EDUC./INFRAESTRUCTURA, ETC.	5	2
INFORMACIÓN DEMOSOCIAL	6	2

(sobre un total de 21 notas)

Esquemáticamente hemos construido 3 categorías para clasificar los encuadres temáticos posibles. La primera categoría comprende los reportes de violencia, delitos, seguridad, bandas armadas, narcotráfico, desafío al monopolio estatal de la fuerza, etc. La segunda comprende los reportes de actividades educativas, de capacitación, emprendimientos artísticos, obras de infraestructura etc., u otras mejoras a la calidad de vida de los favelados que se motorizan desde organismos estatales u organizaciones sociales. En el tercer caso se colocaron todas aquellas notas que publican datos de informes sobre condiciones de vida, encuestas, datos estadísticos sobre la favela y sus habitantes.

Lo primero que el cuadro exhibe es que hay una diferencia entre los encuadres que dominan en el diario de Río y los que predominan en *O Estado de Sao Paulo*. En el primero domina claramente el tratamiento de las cuestiones ligadas a seguridad y violencia, mientras los encuadres que privilegian mirar acciones de mejoramiento de las condiciones de vida o la información demosocial tienen escasa presencia. En el caso del *Estado* la proporción es inversa. Debe tenerse en cuenta además que la diferencia en el número de encuadres entre los diarios se agranda si se considera que en 3 sobre 4 de los encuadres en términos de seguridad del *Estado* se refieren a acontecimientos en las favelas de Río de Janeiro. Este dato no es tan sorprendente si se tiene

en cuenta que dichas coberturas periodísticas responden a los episodios de violencia en una de las favelas de Río de Janeiro que llegó a todos los titulares de la prensa internacional.

La tematización de las favelas en San Pablo, en cambio, parece privilegiar otros aspectos que escapan al encuadre de la seguridad y la cuestión del control territorial. Este contraste que revela el cuadro, también se obtiene de la lectura comparativa de lo que reporta la prensa de las favelas cariocas y de las favelas paulistas.

Por cierto que San Pablo, y otros centros urbanos del país, no está completamente exento del problema observado en Río de Janeiro. Los medios lo mencionan, pero aclaran que es un fenómeno incipiente, que no se encuentra tan “fuera de control” como se percibe en Río de Janeiro.

El que apenas aparezcan reportes sobre violencia en las favelas paulistas durante el período, no significa que no haya cobertura sobre graves problemas sociales. En el *Estado* es llamativa la tematización de la desigualdad en la gran urbe. Se detecta un gran énfasis en la cuestión de la convivencia codo a codo de muy ricos y muy pobres a través de la descripción de imágenes chocantes de contrastes, de la narración descriptiva del funcionamiento, muchas veces perverso, de las relaciones sociales entre los estratos y, por último, a través de la exhibición de indicadores socioeconómicos urbanos comparativos. Un ejemplo representativo de este cliché periodístico sobre San Pablo y las diferencias y desigualdades sociales, se encuentra en una crónica acerca del surgimiento de emprendimientos inmobiliarios de lujo al lado de las favelas. “De un lado del muro hay una fila irregular con ranchos de 3 metros cuadrados; del otro, un escenario *art déco* con palmera estilo Miami”. Y en el fondo de la crónica periodística, detrás de la cuestión del contraste visual, se describe un conflicto entre la empresa desarrolladora y los favelados organizados, por la ocupación y el derecho de tenencia de unas tierras en las que están asentados desde hace 40 años.

Resultará ilustrativo, en relación a este énfasis sobre la desigualdad en el espacio urbano, describir cómo el *Estado* decidió exponer la mirada europea y liberal de Timothy Garton Ash, el profesor de Oxford e “historiador del

presente”, al reproducir su columna habitual del *Guardian*, titulada “En estas ciudades sin Dios, la democracia es burlada por la pobreza y la desigualdad”, en la que el ensayista escribió sobre su experiencia reciente de los contrastes sociales en la ciudad de San Pablo.³⁴

Conducido por una favela paolista, este inglés tomó nota de la desigualdad social conviviendo en el apretado espacio urbano y sus lógicas perversas. “Niños ricos de la escuela particular del otro lado de la calle la visitan en busca de su dosis de marihuana o crack. ‘Es una especie de *drive-thru*’”. Las observaciones del inglés no se limitaron a la favela: “‘Mi mucama’ es una apertura característica de las descripciones que hacen de los pobres urbanos los buenos liberales de izquierda de San Pablo, mientras disfrutamos de un excelente almuerzo en los fabulosos restaurantes de la ciudad”.

Estas impresiones obligaron al liberal a reflexionar sobre la factibilidad de la democracia en semejantes sociedades. Comenzó admitiendo que Brasil cumple con los requisitos definicionales de la democracia entendida como procedimiento político. Y sin embargo, el historiador advierte que el problema no puede darse por concluido con esa definición formal: “Mas la pregunta que se impone es: ¿por cuanto tiempo es posible mantener una democracia liberal con tales extremos de desigualdad, pobreza, exclusión, criminalidad, drogas y anarquía?”.

Se puede ir incluso más lejos –continúa reflexionando– y cuestionar la existencia misma de una efectiva igualdad ante la ley: “De hecho, se ha planteado la pregunta de hasta qué punto se puede llamar a esto una democracia liberal, dados tales extremos. (...) Aquí, los pocos privilegiados están por encima de la ley (una Paris Hilton brasileña no habría terminado tras las rejas), y los muchos pobres están por debajo de ella. Los ricos disfrutaban de una inmunidad virtual con relación a la policía local, y la policía local disfrutaba de inmunidad virtual en relación a cualquier cosa que pueda hacer a los pobres, que también resultan ser, en su mayoría, negros”. Esta explicitación de la tensión entre pobreza y democracia, que aparece connotada en gran

34 Timothy Garton Ash, “Democracia desafiada pela pobreza”, *OESP*, 2/7; la nota fue parcialmente reproducida por *Clarín*: “Brasil: ¿cuántas favelas resiste una democracia?”, *Clarín*, 26/7.

parte de los debates que venimos presentando, será retomado como eje en las conclusiones.

Otro aspecto de la cobertura del diario paolista merece ser destacado. Más allá de las exposiciones y reportes sobre actividades educativas, de capacitación o las campañas de organizaciones civiles que buscan llevar alguna mejora a los pobres urbanos, se percibe a través del diario paolista una fuerte presencia del Estado en funciones que van mucho más allá de la intervención policial. El *Estadao*, insospechable de simpatizar con el PT, recuerda que la ciudad lleva adelante una agresiva política de urbanización comenzada en la administración de Marta Suplicy, basada en la entrega de títulos de propiedad a los favelados y la construcción de servicios e infraestructura. En una nota sugestivamente titulada “De favelas a barrios” se lee: “Gran parte de estos recursos está siendo invertido en el Programa de Urbanización de Favelas, el mayor conjunto de obras de urbanización de América Latina. En vez de transferir a los favelados para grandes conjuntos habitacionales, la Secretaría de Vivienda invierte en la infraestructura local como agua corriente, cloacas, drenaje, pavimentación, asfalto, iluminación, arborización y regularización de direcciones”.³⁵ En consonancia, y si bien suena algo paradójico, otra exposición de datos demográficos y encuestas en una nota del *Estadao* indica que esas mejoras en las condiciones de vida en la favela –y no el aumento de la pobreza– constituyen la explicación del crecimiento de la población favelada.

Esta presencia más integral de las agencias del Estado en la favela paolista contrasta fuertemente con la situación que se observa en Río de Janeiro. La relación de los pobres urbanos favelados con el Estado es allí completamente distinta. Como se aprehende a través de una nota del *Estadao*, en Río la única forma en la que el Estado entra en la favela es con el carro acorazado. Según el periódico paolista, esta expresión común delata los niveles de distancia, el enfoque predominantemente coercitivo de las autoridades estatales hacia la favela y, como contraparte, la arraigada desconfianza de los favelados cariocas hacia una autoridad que perciben como violenta y corrupta.

Como dijimos, durante el período considerado en este estudio, un nuevo hecho de violencia relanzó la atención mediática sobre la favela. La descrip-

35 “De favelas a bairros”, *OESP*, 19/7.

ción de las secuelas del episodio en el debate público nos aportará algunos orientaciones sobre la dinámica de este conflicto y el comportamiento y rol de los medios en él.

En los últimos días de junio tuvo lugar un “megaoperativo” policial en el “Complexo do Alemão”, una de las tres grandes favelas de Río de Janeiro. La irrupción policial en la favela y el enfrentamiento con bandas con control territorial dejó decenas de muertos (los números de muertos reportados en la prensa oscilan entre 19 y 44). A la semana, pericias legales ofrecieron evidencias que dejaban un cúmulo de dudas acerca de cómo se produjeron los hechos. Ciertos indicios llevaban a pensar que habían tenido lugar varias muertes por ejecución, lo que le confirió al caso ribetes de escándalo por el comportamiento policial.³⁶

Como es de esperar, el caso produjo una serie de reacciones públicas. Es interesante comparar y contrastar cómo los dos diarios en observación reflejaron las voces que se alzaron públicamente.

Las voces ligadas a organizaciones internacionales, organismos no gubernamentales y otras instituciones que cuestionaron tanto el actuar policial como el enfoque con que las autoridades estatales abordaron el problema, aparecen todas reflejadas en el diario de San Pablo y no recibieron mención alguna en su par carioca.

Una de las reacciones inmediatas fue un comunicado de UNICEF. Como forma de llamar la atención pública, la organización humanitaria clasificó a los niños del complejo en cuestión en el mismo “escalón de vulnerabilidad” que los niños en situaciones de extrema pobreza en regiones con conflictos armados como la Franja de Gaza, Afganistán o Sri Lanka.³⁷ Con esta equiparación, parece haberse estimulado una nueva y, para Brasil, chocante construcción de la figura de la pobreza: el niño pobre entre el fuego cruzado de una guerra civil o interna.

A través de un petitorio a las autoridades de la Unión Europea para que instaran a Brasil a un “diálogo franco”, Amnistía Internacional fue otra de

36 “Operacao no Alemão: oito podem ter sido executados”, *O Globo*, 3/7.

37 “Unicef comparó crianças do Alemão às de Gaza”; *OESP*, 30/6.

las voces que logró hacerse oír en la prensa e intentar ejercer alguna presión sobre el gobierno. El director europeo de la organización se declaró “preocupado por las tentativas del gobierno federal de equiparar el crimen organizado al terrorismo”. Amnistía también atribuyó las muertes a la negligencia del gobierno con las comunidades más pobres, las cuales se encuentran –según la organización– acorraladas entre la violencia de grupos criminales y la brutalidad de la policía. “El ‘caveirão’ (nombre con el que se designa al vehículo blindado del Batallón de Operaciones Especiales) es un poderoso símbolo del fracaso de las políticas de seguridad pública en Río de Janeiro”, declaran. Para la organización de derechos humanos “ignorar las raíces del problema –pobreza, exclusión social y un sistema judicial débil– no dará soluciones a corto plazo sino que empeorará la situación” en términos de la situación de los derechos de los pobres.³⁸ Amnistía Internacional mostró en este ejemplo su versatilidad y profesionalismo en el arte de lograr cobertura mediático-periodística para su mensaje. De cara a la situación en las favelas y el tema de la seguridad, la organización ya tenía una postura consolidada. Para Amnistía Internacional: “El problema principal es que el gobierno continúa sin una política de seguridad pública. Décadas de negligencia crearon un enorme vacío en los bolsones de pobreza, el cual fue ocupado por la criminalidad”. El ataque a estos problemas “no puede olvidar las políticas sociales, para que el crimen no ocupe el espacio del Estado”.³⁹

También se activaron críticas severas al accionar estatal en el caso desde el ámbito académico. En el marco de un seminario en Harvard, un especialista carioca en violencia urbana, advirtió que la irrupción policial, al actuar con tanta violencia como los traficantes, sólo consiguió generar más violencia como reacción. “Es preciso punir, no matar”, afirmó. A diferencia de los otros organismos, este especialista distinguió entre el gobierno federal y el estadual a la hora de imputar responsabilidades. En esta matización que ofrece el especialista, parece residir la explicación de la mayor violencia en Río de Janeiro respecto del resto del país. “Eso se debe a que en la capital

38 “Anistia Internacional pede que UE cobre de Lula respostas para a violência”, *OESP*, 4/7.

39 “O governo continua sem política de segurança”, *OESP*, 24/5; Entrevista a Tim Cahill, investigador de Amnistía Internacional.

carioca hubo negligencia aún mayor de las autoridades. Más allá de ello, el turismo facilita la venta de drogas, lo que genera una industria del crimen bastante eficiente”.⁴⁰

Todas estas voces que se escucharon desde San Pablo, modularon críticas e imputaron responsabilidades a funcionarios locales, colocaron a la población de las favelas como sujetos de derecho ante los que el Estado tiene deberes.

En contraste con estas voces que desde la prensa paolista exhibieron la problemática encuadrada en términos de violaciones a los derechos humanos de la población, el *O Globo* eligió dar espacio a una voz reactiva con énfasis diferente. Un columnista invitado, oficial de la policía militar estadual, caracterizó lo que ocurre en las áreas en las que se encuentran localizadas las favelas como conflictos armados análogos a los ocurridos en países y territorios envueltos en guerras internas. Los pobres se encuentran en esta situación atrapados entre el fuego cruzado de los marginales, exigiendo una pronta respuesta de los organismos policiales que nunca pudo hacerse efectiva. Estos fracasos son atribuibles, continúa, al predominio interpretativo de fórmulas excéntricas idealizadas por intelectuales anclados en una curiosa *episteme* sociológica que todo lo explica por las desigualdades sociales. Para salir del desorden es necesario reconocer que se trata de bandos beligerantes con fusiles, granadas, minas, pequeñas fracciones de infantería, patrullas, evacuación de heridos y comunicaciones, establecidos en el terreno y con control de la población, con utilización del terror y la intimidación y, por último, portadores de una nueva y odiosa identidad cultural. La conclusión es que el fenómeno no puede ser tratado con instrumentos tradicionales. Más que importar inútiles modelos de policiamiento ostensivo, el articulista sugirió otros métodos. Si queremos modificar, definitivamente, esa realidad, debemos aceptar el desafío sin recelos, y liberar, aún con el uso de la espada, a la población de las garras del crimen, como estamos haciendo en el complejo do Alemão, librándolo del horror.⁴¹ De este modo, *O Globo* administra su espacio de opinión para otorgarlo a una posición que, lejos de los recelos de los activistas de dere-

40 “Harvard discute violência no Rio”, OESP, 30/6.

41 Mario Sérgio de Brito Duarte, “Libertade para o Alemão”, *O Globo*, 29/6.

chos humanos, propone usar la fuerza, en el grado que sea necesaria, para liberar a los pobres

En este nuevo contexto, el pobre urbano aparece bajo una nueva luz que el *O Globo* se encargará de mostrar a la opinión pública.

Un mes más tarde, el diario retoma la idea de su columnista invitado, la de los pobres como pueblo a ser liberado, y desarrolla la posición aunque moderando la consideración de los medios idóneos. La hace liderando una campaña pública a través de sus columnas. Según sus propios términos, el medio decidió publicar una serie de reportajes con el objetivo de acabar con la “falsa idea” de que son la clase media y los estratos altos quienes padecen la inseguridad. El propósito es destruir este prejuicio mostrando y dando voz a los propios afectados. “El favelado común, honesto, trabajador –la gran mayoría– es, en verdad, la víctima más próxima de las cuadrillas que usurpan amplias áreas del alcance del poder público”. Buena parte de la población, sostuvo el diario en una nota editorial, vive fuera del Estado de derecho garantizado desde la redemocratización de 1985. “Allí la dictadura no acabó”, habría desapariciones y tribunales de excepción operando fuera del alcance de la ley. *O Globo* razonó que esta “dictadura del crimen” es un régimen más sangriento que la dictadura 1964-1985. Sin embargo, aquí hace una inflexión respecto de la posición dura de su columnista en tanto que admite que, cuando aparece, el Estado lo hace únicamente bajo la forma de la corrupción policial. No priorizar la limpieza y el perfeccionamiento de la policía, advirtió, puede hacer que la dictadura en el poder en las favelas se extienda a ciudades, a los estados, al país, en síntesis, llevaría al Brasil a “una tragedia colombiana”.⁴²

Las repercusiones de esta iniciativa periodística permitieron a *O Globo* presentarse a sí mismo, al poco tiempo, como constructor de agenda al provocar movimientos en Brasilia a nivel del poder ejecutivo y del legislativo. En efecto, el ministro de Justicia reaccionó públicamente a los reportajes juzgando inadmisibles la existencia de sistemas de normas paralelos que concurren con la ley estatal y anunció que el gobierno federal vehicularía programas que articulen acciones sociales y políticas de seguridad. A su vez,

42 “Ditadura na favela”, *O Globo*, 21/8.

en una crónica posterior, el *O Globo* reportó que su serie de coberturas sobre “Los brasileros que aún viven en la dictadura” disparó una serie de actividades deliberativas en el marco de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Entre otras medidas, informado de las gravosas consecuencias de la pérdida del poder público en manos de bandas privadas y de las violaciones de derechos que tal situación de las favelas tiene por consecuencia, el organismo legislativo propuso un seminario para discutir respuestas con autoridades, especialistas y representantes comunitarios. El título del evento delata la utilización de la misma clave de lectura que propone el *O Globo* para pensar la situación de la favela: “Los excluidos de los derechos: caminos para liberar al pueblo favelado de la tiranía del tráfico y de las milicias y de la omisión del Estado”.⁴³

En los meses posteriores al período comprendido en este trabajo, el gobierno federal puso en funcionamiento un programa de urbanización de favelas en el que invirtió alrededor de 3 billones de reales al tiempo que autorizó la intervención del ejército para combatir bandas y milicias. En uno de los actos de presentación del programa el presidente afirmó que el espíritu del mismo es lograr que las favelas salgan de las páginas policiales de los diarios.

Inversamente a lo que sucede en Brasil, en el caso de México el riesgo sobre la soberanía estatal que, para la prensa, conllevan los niveles de pobreza, proviene de las zonas rurales. La cuestión de la relación entre pobreza y democracia constituye un aspecto central del debate en los medios mexicanos. *La Jornada* insiste sobre el avasallamiento de derechos sociales constitucionalmente garantizados que implican las condiciones de marginalidad en que viven los ciudadanos mexicanos, particularmente en las zonas rurales. Frente a esta situación el diario denuncia que la estrategia del gobierno “de facto” ha sido incrementar el presupuesto de seguridad y comprometer a las fuerzas armadas en la seguridad interna, para reprimir los focos de protesta que se producen en las comunidades indígenas y campesinas. Desde esta perspectiva, un gobierno ilegítimo y comprometido con los intereses empresariales no dispone de recursos, y mucho menos de voluntad,

43 “Camara vai discutir situacao em favelas”, *O Globo*, 23/8.

para desarrollar políticas activas de lucha contra la pobreza; de modo que sus únicas alternativas resultan la socialización de las responsabilidades que le competen al Estado, pidiendo la solidaridad de los empresarios, por un lado, y la más cruda represión, por el otro.

Reforma, por su parte, insiste en que la pobreza extrema y su secuela de analfabetismo y dependencia del Estado, inhibe el ejercicio de los derechos civiles elementales dado que coloca a los ciudadanos que la padecen en condiciones de inferioridad y sometimiento respecto del sistema judicial y las fuerzas de seguridad. Tampoco los derechos políticos pueden ejercerse libremente puesto que la autonomía individual, necesaria para el pleno ejercicio de la voluntad política, queda limitada por las razones mencionadas. En este contexto, se lamenta el florecimiento de redes de intercambio político clientelar entre estructuras políticas tradicionales y ciudadanos pauperizados. La propuesta de *Reforma* consiste en avanzar hacia un pacto de cohesión social que institucionalice el conflicto, abriendo la participación a los diferentes actores sociales y políticos con el propósito de garantizar un umbral de protección social a todos los ciudadanos. Un asiduo columnista del diario lo pone en estos términos refiriéndose a un informe de la CEPAL: “La propuesta de la CEPAL tiene una enorme pertinencia. Se trata de construir un ‘contrato de cohesión social’ que permita sellar el acuerdo y el compromiso político en torno a ese objetivo y disponer de los recursos económicos, políticos e institucionales que lo hagan viable. La idea de ‘contrato’, aunque metafórica, resulta elocuente para subrayar la necesidad de participación de una serie de actores que a través de la negociación y el acuerdo pueden forjar compromisos para aceptar los mecanismos de integración social y hacer frente a las tendencias disruptivas. Se trataría de pactar una ruta gradual pero progresiva y exigible de apropiación de derechos (y por supuesto de obligaciones), que comprometería al Estado y a la sociedad, y para lo cual se requiere un financiamiento renovado y efectivo para garantizar un umbral de protección social a todos los miembros de la sociedad”.⁴⁴

En términos de propuestas, también *La Jornada* se hace eco del proyecto de los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), liderado por el “presidente legítimo” Andrés Manuel López Obrador, de establecer una renta

44 José Woldenberg, “¿Cohesión social?”, *Reforma*, 2/8.

básica universal equivalente a medio salario mínimo que prácticamente se financiaría con el alto costo burocrático que insume la estructura actual del gasto social. Los medios relevados coinciden en que existen en México una serie de programas sociales superpuestos y mal coordinados, pero no una política social con una estrategia definida para combatir la pobreza.

El peligro principal, advierte *La Jornada*, radica en el riesgo que corre la propia democracia ante un Estado que ha perdido el monopolio del uso legítimo de la fuerza frente a los carteles del narcotráfico y las organizaciones armadas de base étnica que controlan las zonas rurales. Respecto del flagelo del narcotráfico, tanto *Reforma* como *La Jornada* coinciden en que la falta de políticas sociales de protección y de promoción de la economía rural, favorecen la proliferación de organizaciones clandestinas de narcotraficantes en las zonas de mayor pobreza. Según datos publicados en ambos periódicos, los carteles controlan el 30% de las tierras cultivables del país.

El problema de las organizaciones sociales armadas se inscribe en otro marco. Como sucede en Brasil, en los medios mexicanos la problemática de la pobreza resulta segmentada territorialmente entre pobreza rural y pobreza urbana. La principal problemática asociada con esta última remite a los déficits de vivienda e infraestructura urbana, aunque su presencia en los medios, al revés que en Brasil, es claramente menor que la de la pobreza rural que se asocia con el hambre, el analfabetismo, las epidemias por contaminación y la violencia estatal. Se insiste, además, con la mayor vulnerabilidad de las mujeres menos calificadas para el trabajo rural y sometidas a la explotación sexual.

Para *La Jornada*, sin promover abiertamente el uso de la violencia política, la cuestión resulta de la atávica postergación de las zonas rurales del país donde se concentra la población indígena que, además, aún espera por la consagración de sus derechos en la Constitución Nacional como lo exige, entre otros organismos internacionales, la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Organizaciones como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Ejército Popular Revolucionario (EPR) tienen un amplio reconocimiento en el diario de centro izquierda y, curiosamente, casi no merecen consideración de los otros medios relevados. Junto con una profusa nómina

de organizaciones sociales campesinas, se presentan en *La Jornada* como vanguardia de la resistencia a la globalización neoliberal, resguardando la soberanía nacional y luchando contra la postergación y el sometimiento de los pueblos originarios de México. En todo caso, editorializa el periódico, la amenaza para la seguridad nacional la constituye un gobierno anti-popular y espúreo que, como toda respuesta, recurre a la represión ilegal y favorece la sobreexplotación de las poblaciones indígenas generando una peligrosa espiral de violencia, sin atender las advertencias que al respecto le realizan tanto el clero como organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

Tanto *La Jornada* como *Reforma* presentan como urgente la necesidad de establecer un programa alimentario para las zonas rurales más postergadas y avanzar en una reforma agraria que neutralice la explotación monopólica de la tierra, que agota los recursos naturales por sobreexplotación, contamina el ambiente mediante la utilización de herbicidas tóxicos y altera la calidad de los cultivos utilizando semillas transgénicas. Asimismo, la reforma debe apuntar a devolver el control de la producción a los pequeños productores rurales que son los “verdaderos” dueños de la tierra.

“La diplomacia del etanol” y el auge de las exportaciones primarias: ¿nuevas oportunidades en el combate contra la pobreza?

La emergencia alimentaria en el sector rural converge con una discusión regional muy difundida en los medios mexicanos acerca de la producción de biocombustibles como estrategia para modernizar la producción agrícola y así lograr la salida de la pobreza.

La cuestión de los biocombustibles ha ingresado en la discusión pública a nivel global en forma reciente, debido, probablemente, al alza internacional de los precios del petróleo y su consecuente (re)descubrimiento como recurso energético alternativo. Las consecuencias sociales de su uso generalizado, en especial su repercusión en términos de distribución de la riqueza e impacto sobre la pobreza, se están convirtiendo en objeto de grandes controversias en las que actores gubernamentales, especialistas y

diferentes voces interesadas no se ponen de acuerdo. Este debate, con sus diferentes posturas, se ha visto reflejado en la prensa latinoamericana.

En el contexto mexicano, sostienen una posición favorable a este nuevo modelo de producción los empresarios agrícolas en consonancia con la cruzada internacional que, como veremos, mantiene el presidente de Brasil. Las organizaciones sociales del agro, principalmente la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), y organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), señalan, en cambio, el peligro que implica la producción de biocombustibles en relación con el aumento del precio de los alimentos y el riesgo de sobreexplotación de la mano de obra rural, aspectos que contribuirían a profundizar el problema de la pobreza. Más allá de esta disputa, salvo los empresarios, todos los actores que participan de la discusión en los medios mexicanos coinciden en que la salida de la pobreza a través de la producción de agrocombustibles depende centralmente de una política estatal que promueva la participación de los agricultores, no sólo en la producción de materia prima para el etanol, sino también en su fabricación y venta para darle valor agregado a su trabajo.

La soberanía y seguridad alimentarias aparecen como los principales aspectos a considerar desde la perspectiva de los medios aztecas, dado que el país registra 17 millones de personas en pobreza alimentaria e importa casi la mitad de los alimentos que consume. Otro aspecto del debate refiere a la sustentabilidad de recursos naturales. Todas las experiencias de cultivo intensivo de soja, palma aceitera, maíz, y otros vegetales base de biocombustibles, se argumenta, conllevan una considerable devastación de recursos naturales: desmonte de bosques y de arbustos, contaminación de suelos por el uso de agroquímicos, pérdida de la biodiversidad por el abuso de transgénicos y emisiones de gases de efecto invernadero, como el óxido nítrico producido por los fertilizantes. Además, siguiendo con el cuestionamiento a la concentración de la economía como principal causa de la pobreza, *La Jornada* advierte que las semillas transgénicas utilizadas para la producción de biocombustibles son provistas por empresas monopólicas transnacionales, capaces de fijar los precios y apropiarse de la mayor parte del excedente.

También se pone en juego un aspecto eminentemente político vinculado a la soberanía económica y la participación democrática. Al respecto, se insiste con que debe atenderse el derecho de las familias campesinas e indígenas a la tierra y a vivir dignamente de su trabajo agrícola. Es necesario que las propias comunidades campesinas, con apoyo del Estado, cuenten con los mecanismos que les permitan desarrollar y ejercer un control comunitario sobre la bioenergía que ellas mismas produzcan, que ellas sean las que decidan las formas, las cantidades, los usos y los destinatarios de esa energía. Se toma como referencia negativa la experiencia de las naciones, como Argentina, donde se ha impuesto un monocultivo dictado por el mercado internacional. Según la prensa mexicana, allí los efectos han sido indeseables: quiebra de pequeños y medianos agricultores, desempleo, devastación de suelos y vegetación, etcétera. Si en México se quieren promover dichos cultivos, sostiene *La Jornada*, ha de garantizarse el respeto y la autonomía a las tierras comunitarias, ejidales y familiares.

Todos estos matices y especulaciones frente a la cuestión de los agrocombustibles que se observan en el debate público mexicano, reaparecen en Brasil pero enmarcados en la campaña internacional de Lula a favor del “etanol”.

El presidente de Brasil, el país que más tiene para ganar con esta tecnología dada su experiencia histórica y sus ventajas comparativas en la elaboración de combustibles a partir de la caña de azúcar, se ha convertido en uno de los grandes defensores públicos de esta nueva alternativa como oportunidad para el desarrollo y el bienestar de países con recursos agrarios. En una entrevista ofrecida a un diario chileno, el presidente de Brasil condensa sus argumentos. Sostiene que los biocombustibles ofrecen esperanza a los países pobres al combinar crecimiento económico sustentable e inclusión social, dado su enorme potencial de creación de empleos y de ingresos. Concluye, por tanto, que pueden ayudar a combatir el hambre, aportando ingresos que permiten a las poblaciones pobres adquirir alimentos.⁴⁵ En una gira por cinco países centroamericanos se observa a Lula intentando conseguir el apoyo de la opinión pública regional repitiendo un mensaje conformado por

45 “Biocombustibles solucionarán los problemas de contaminación y energía”, *La Nación*, 23/7.

una simple imputación causal: “La pobreza en mi país se reduce y la producción de biocarburantes aumenta”.

Del otro lado, debido al impacto que el uso de cultivos con fines energéticos tendría sobre los precios de ciertos productos alimenticios básicos que forman la parte principal de la dieta de la población pobre en gran parte de América Latina, otras voces como movimientos campesinos, expertos internacionales y políticos locales han salido a cuestionar las consecuencias sociales del avance y generalización de este combustible alternativo.

En la observación del conjunto de voces que se tensan en torno a esta cuestión llaman la atención las diferencias de comportamientos de la prensa en los diferentes casos nacionales. Más de la mitad de las coberturas sobre el asunto pertenecen a Brasil y México (con 15 para el primero y 13 para el segundo). El resto, con la excepción de Perú que no presta atención al tema, se reparte entre los países restantes. Éstos últimos muestran un tratamiento bastante balanceado entre las diferentes posiciones en la polémica por los agrocombustibles. En cambio, la comparación de la cobertura mexicana y brasilera puede ser vista como un verdadero contrapunto. Se trata de un interesante ejemplo que ilustra cómo la cobertura mediática está fuertemente ligada a intereses y percepciones de carácter nacional.

En la prensa mexicana, en la que el tema es hegemonizado por *La Jornada* (11 de las 13 coberturas), se concentran las voces que cuestionan críticamente las consecuencias sociales del auge de los biocombustibles. Se le da especial resonancia a informes de organismos internacionales como la Relatoría Especial en Derechos a la Alimentación de la ONU que alerta sobre posibles aumentos en el hambre mundial y a la opinión de oficiales de la FAO que advierten que el alza de los alimentos amenaza con elevar la pobreza en América Latina, donde 200 millones de personas no disponen de lo mínimo para vivir. También intervienen intensamente actores domésticos, especialmente los ligados a movimientos campesinos que, como hemos visto, hacen públicos los temores del sector. Hace oír su voz, por último, un grupo de legisladores que critican al presidente por modificar un proyecto de ley destinado a regular y contener los posibles efectos nocivos del tema. Vista desde la distancia, la prensa mexicana se muestra en esta cuestión par-

ticularmente sensible a los temores del público local por la presión sobre el precio del maíz, el elemento central en la dieta de su población.

En Brasil, donde el *Estadao* lidera en la cobertura (11/15 registros), la mirada es completamente diferente. Si bien aparecen algunas voces de duda, como la del MST, el movimiento de campesinos sin tierra, o de intelectuales críticos como el portugués Boaventura de Souza Santos, el asunto es prevalentemente tratado en una luz favorable. No sólo otorga gran espacio, alineándose así al gobierno en sus respuestas a las posturas críticas (“Itamaraty rebate al relator de la ONU y dice que etanol trae desarrollo”), sino que retrata la situación como la de un consenso regional detrás de la posición brasilera (“América del Sur defiende la producción de biocombustibles”, “Declaración final de la Cúpula Energética Sudamericana defiende unión para producir biocombustibles”). De este modo, se advierte nuevamente cómo sobre ciertos asuntos la prensa refleja y construye a la opinión pública en torno a ciertos intereses nacionales.

En el acompañamiento mediático de la “diplomacia del etanol”, lo que la prensa brasileña parece hacer es promover el rol del jefe de Estado como un *world player*. En el nivel de las argumentaciones más sofisticadas, más allá del gran público, y destinadas a un debate entre élites sociales y políticas, no deja de haber cuestionamientos, sin embargo, a la posición diplomática que asume el gobierno. La periodista de *O Globo*, Miriam Leitão, critica la inconsistencia –fruto acrítico del impulso al etanol brasileño– del rechazo de Lula a las cuotas de emisión frente al problema del cambio climático. Atribuir el cambio climático, el mal colectivo mundial, a la oposición Norte-Sur, países ricos-países pobres, privilegiados-subprivilegiados es equivocado. Esa forma de ordenar la imputación de responsabilidades y distribución de costos, restricciones y reparaciones a futuro –objeta la periodista– no puede sustentarse creíblemente ante las realidades de China, India y Brasil. A su vez, la presentación de Lula de la producción del *álcool brasileiro* como ambientalmente sustentable, socialmente progresiva y respetuosa de derechos, esconde situaciones poco controladas que el gobierno prefiere barrer bajo la alfombra. Una de ellas es el desplazamiento de la frontera agrícola hacia el interior de la Amazonia. La otra está sustentada en reportes provenientes de una unidad móvil de fiscales federales del trabajo –agencia considerada por la OIT como fundamental en la lucha contra formas explotadoras de trabajo en el Brasil– quienes, en controversia con políticos locales aliados a los nuevos agro-empresarios, detectaron,

en una *fazenda* productora de *álcool*, en Pará, trabajadores en condiciones degradantes, con jornadas de 12 horas, falta de agua potable, hacinamiento, *contracheques zerados* –pagos en bonos internos de la empresa–, y otras formas premodernas de explotación humana.⁴⁶

La discusión sobre la pobreza en los medios de Perú, como hemos mencionado, es ajena a la cuestión de los biocombustibles. Sin embargo, en ese país, el alza internacional del precio de los bienes primarios exportables que benefician el intercambio de toda la región, estructura un conflicto político-distributivo análogo, que se despliega en la arena mediática y que se discute y dirime en términos de su impacto sobre la pobreza.

En junio aparecen plasmadas en la prensa las posiciones del conflicto. Un informe del Banco Mundial titulado “Análisis Ambiental del Perú: Retos para un desarrollo sostenible” refleja la indefinición y la potencial controversia al admitir textualmente que “los efectos negativos de la minería son todavía materia de preocupación”. En otras palabras, este organismo que, como muestran anteriores ejemplos, funciona como figura con autoridad técnica aceptada por la generalidad de las partes en los conflictos, confiesa no poder juzgar en la controversia sobre los efectos de la minería. A su vez, el viceministro de economía anuncia que se trabaja en la modificación de la Ley del Canon minero, con el fin de generar un reparto equitativo entre las regiones en términos de ingresos, reducción de la pobreza, inclusión social y evitar así el conflicto. Por su parte, los presidentes regionales meten baza al señalar que el canon es aún “insuficiente” en términos de pagos transferidos para infraestructura y desarrollo como compensación por los costos ambientales y los daños al entorno. Varios de ellos se quejan, a su vez, de la desaparición de la actividad turística (argumento que otras voces ponen en duda), y cuestionan los mecanismos, en atención a los niveles de pobreza, con que el gobierno central distribuye entre regiones.⁴⁷

En agosto, los medios dan publicidad a un informe de la CEPAL sobre tendencias para América Latina que anuncian “10 años más de altos precios de metales”. Simultáneamente, el director ejecutivo del organismo, José Luís

46 Miriam Leitão, “Lavoura arcaica”, *O Globo*, 2/10.

47 “Banco Mundial advierte riesgo ambiental”, *La República*, 6/6; “Redistribuirán dinero del canon”, *La República*, 15/6; “Canon es aún insuficiente”, *La República*, 17/6.

Machinea, advierte sobre el dudoso impacto en el desarrollo y la reducción de la pobreza, dado el escaso empleo generado y el poco valor agregado de la actividad extractiva primaria.⁴⁸

En septiembre se hacen nítidamente visibles las posiciones sobre el tema. En una entrevista a *La República*, Machinea sostiene que si, como en Chile, los impuestos especiales se destinan a actividades como innovación tecnológica, se justifica cambiar las reglas de juego cuando la renta es demasiado grande y se justifica negociar. Un columnista de *La República*, por su parte, critica al resto de la prensa por omitir información que aparece en informes del FMI destacando el bajo impacto en el empleo de la actividad extractiva de minerales en Bolivia.

En *El Comercio* se hacen oír las voces opuestas. El publicista liberal Jaime de Althaus, intenta reducir la polémica interpretando que todo el conflicto se reduce a una “lucha ideológica” de minorías de “antiglobalizadores” y “chavistas continentales”, los cuales, por medio de una red de medios y organizaciones no gubernamentales, manipulan “los temores naturales de la población azuzándoles el pasado negro de la minería”. El enemigo, sostiene el autor, es el inverso. “El verdadero destructor de la ecología es principalmente la pobreza. (...) El capital, en cambio, ayuda a salir de la pobreza y cumple directamente una función civilizadora y protectora del medio ambiente”. El mismo día, el “analista” Fernando Cillóniz, atribuye el conflicto a una brecha de entendimiento aprovechada por “gente de mala fe –extorsionadores, politiqueros, narcotraficantes, terroristas, etc.– que jamás van a dejar de saquear a la minería, por más responsable que ésta sea”. Llama, por tanto, a “la prensa responsable (...) a jugar un rol fundamental en comunicar objetivamente los inmensos aportes de la minería a favor de muchos pueblos pobres de nuestra tierra”. Ambos argumentos contienen un núcleo semántico común expresable del siguiente modo: el problema en cuestión tiene una solución racional “objetiva”: desregular la explotación minera. Toda otra forma de intervención sobre el tema resulta una manipulación interesada de los temores irracionales para ocultar una verdad evidente.

48 “10 años más de altos precios de metales”, *La República*, 24/8; “CEPAL: Perú se beneficiará de altos precios de materias primas en próximos 10 años”, *Gestión*, 24/8.

Gestión, por su parte, aporta un análisis técnico menos ideológico y más sofisticado de un economista de la Universidad del Pacífico. Este habitual articulista del diario se pregunta si el canon minero es un instrumento para alcanzar mayor equidad, razonando que si se lo distribuye entre regiones mineras “de acuerdo con el índice de necesidades insatisfechas y no respecto de resultados” –lo que se propone en el ámbito del gobierno– se generan incentivos en los gobiernos locales para permanecer en la pobreza y seguir recibiendo recursos, produciendo, de ese modo, el “efecto perverso” que “acrecentaría la inequidad en lugar de disminuirla”.⁴⁹

A fines de septiembre, como epílogo de toda esta discusión, el presidente se pronunció mostrando su naturaleza de político que intenta mediar y articular entre los intereses desnudos de la sociedad. Descalificó las posiciones intransigentes contra la minería al caracterizarlas como un “proteccionismo medioambientalista”, que abreva en prejuicios anticapitalistas y primitivos de décadas pasadas, que no comprende que la ciencia permite hoy conciliar al capitalismo con sustentabilidad ambiental y social. La inversión de capital constituye, a su criterio, la única salida de desarrollo para las poblaciones serranas. Sin embargo, en un gesto político a las presidencias regionales, distingue las posiciones “antiminería”, que celan intereses ocultos manipuladores de sentimientos, de una legítima búsqueda de mayor bienestar y justicia distributiva por parte de las poblaciones locales afectadas a áreas mineras.⁵⁰

49 “El mercado no lo arregla todo”, *La República*, 21/9; Jaime de Althaus Guarderas, “Walk over”, *El Comercio* 21/9; Fernando Cillóniz, “Minería y entorno”, *El Comercio* 21/9; Oswaldo Medina, “Canon minero, recurso de difícil manejo”, *Gestión*, 28/9.

50 “Alán: Son ‘primitivos’ quienes se oponen tajantemente a la minería”, *Gestión*, 26/9.



Conclusiones: pobreza, medios y democracia

Comenzamos este estudio diciendo que el problema de la pobreza no suscita por sí mismo la atención de los medios. Por lo tanto, parece pertinente cerrar este trabajo enumerando sintéticamente algunas de las observaciones efectuadas que ponen en evidencia los eventos disparadores, las voces autorizadas y los marcos interpretativos a partir de los que la cuestión de la pobreza ha sido tematizada en la prensa latinoamericana.

La pobreza en tanto fenómeno llega a los medios a partir de acontecimientos extraordinarios con “valor de noticia” que suscitan la atención del periodismo. La naturaleza de estos eventos determina, a su vez, el encuadre que se le da al fenómeno. Así, por ejemplo, una catástrofe natural coloca públicamente a los pobres en el lugar de víctimas. Una crónica policial o sobre hechos de violencia en una “favela” narra a los pobres como víctimas o sujetos del crimen, y tiende a encuadrar la pobreza como un problema de seguridad pública.

Sucede asimismo que un mismo evento, como la gira papal por Brasil, genera muy diversos grados de atención mediática y controversia pública en los siete países considerados. En cada uno de ellos han pesado circunstancias y marcos de significación locales a la hora de interpretar las declaraciones del Papa en referencia al flagelo de la pobreza.

Los pobres difícilmente se constituyen como sujetos con voz propia en la esfera pública. Los medios hablan de pobreza –la mayor parte de las veces– estimulados por actos rutinarios de burocracias públicas y privadas tales como la publicación de informes estadísticos y demosociales por parte de agencias estatales, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales.

El interés mediático por la actividad estatal de lucha contra la pobreza –la política social– depende, a su vez, del variable interés de la opinión pública

en el tema y de la existencia de conflictos entre élites políticas y tecnocráticas por el control de estos recursos, como hemos podido constatar a partir de la comparación de Argentina, Brasil y Perú.

En cuanto a las voces que modulan los medios, las gubernamentales aparecen como las más citadas y consultadas, a la vez que son las mayormente criticadas por el periodismo como responsables de la situación social de los pobres. Las Organizaciones Internacionales –en especial el Banco Mundial– aparecen en el lugar de la autoridad técnica legitimada para diagnosticar el problema, lo cual da cuenta de su rol como actor regional en la materia. Por otra parte, el peso de los economistas como “especialistas” en la materia, revela el encuadre perdurable de la pobreza como problema que requiere de una solución técnica orientada a la optimización y creación de mercados. El caso chileno, como hemos visto, configura el paradigma de este tipo de enfoque en toda la región.

A nivel regional, la voz del presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, sobresale en su capacidad de acceso a los medios, al colocar el tema de la “lucha contra la pobreza” en el centro de su puja por el liderazgo en los foros de la política internacional. En el caso del presidente brasileño la pobreza se presenta como un problema resoluble en el contexto de las mutaciones de un modelo de desarrollo regional.

En el relato periodístico llaman la atención, además del protagonismo de gobiernos, iglesia, funcionarios internacionales, empresarios y técnicos, la ausencia –con la excepción de Chile– de los actores institucionales de la oposición y de otros actores representativos en los debates sobre la cuestión de la pobreza. Aquí se manifiestan los persistentes problemas de institucionalización del conflicto que afectan a las democracias de la región. Frente a la evidencia de la pobreza, una problemática que remite a cuestiones centrales de un régimen político democrático como la integración social y la distribución del ingreso, las controversias omiten las referencias a instancias deliberativas y representativas para concentrarse en la puja directa entre poderes de facto respecto de los cuales la prensa juega su rol de agenda sustituyendo, en buena medida, la capacidad de arbitraje que correspondería a las instituciones propias de la representación política. De este modo, el tono flamígero de muchos debates en torno a la pobreza se desarrolla en la arena mediática

entre intereses aparentemente irreconciliables, sin instancias de agregación de intereses y procedimientos deliberativos para la toma de decisiones, características propias de las instituciones representativas.

En cuanto a los tópicos que estructuran los debates sobre las causas de la pobreza y las respuestas pertinentes, es omnipresente –si bien no siempre de forma explícita– la antinomia mercado-Estado como mecanismos reguladores de la producción y distribución social. En los casos relevados se observa un fuerte núcleo temático –especialmente en los diarios tradicionales y en la prensa económica– alrededor del problema de cómo optimizar y ampliar los mercados, en tanto se define a los pobres como aquellos que están excluidos del mercado formal de trabajo.

En los países con experiencias “populistas”, la pobreza constituye –para la prensa mayoritariamente crítica– el “instrumento” y no el “enemigo” de los gobiernos, en tanto estos últimos viven gracias a ella. Las medidas “estatistas” y “demagógicas” que estos gobiernos implementan se explican, en esta lógica argumental, en su intención de instrumentalizar y reproducir la pobreza más que de combatirla en sus reales causas. Asimismo, el “peligro” de los populismos de nuevo cuño en la región toma la forma de una amenazante movilización de sujetos políticos interpelados desde su condición de pobres y/o excluidos, que desbordan con sus demandas a un sistema político presentado como en permanente riesgo de colapso. En este sentido, la apelación “populista” a los sectores postergados aparece en buena parte de la prensa de Argentina, Venezuela, Bolivia y Perú, como una irresponsabilidad democrática que revela la pulsión autoritaria de sus líderes políticos.

Paralelamente, están muy extendidas, entre las diferentes voces que participan en el espacio público, las interpretaciones de la cuestión de la pobreza en relación con su impacto político. Se trata mayormente de manifestaciones sectoriales de preocupación por la cohesión social y la gobernabilidad. Es de hecho este diagnóstico el que subyace a la proliferación de discursos sobre la responsabilidad social empresaria que hemos relevado. Estas manifestaciones concretas coexisten en la prensa regional con preguntas, más distanciadas y analíticas, sobre la compatibilidad entre la persistencia de altas tasas de desigualdad y pobreza, por un lado, y la profundización de la democracia en tanto régimen abierto a la participación colectiva, por el otro.

En cuanto a las problemáticas emergentes que aparecen ligadas al problema de la pobreza, este estudio ha permitido destacar dos importantes ejes que permiten vislumbrar futuros debates. De un lado, sin que desaparezca el tratamiento de la pobreza vinculado a la delincuencia común, aparece crecientemente ligado –como ejemplifican los casos de Brasil y México– a la problemática del narcotráfico y a la presencia de formaciones armadas irregulares que desafían el monopolio del uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. Por lo tanto, la cuestión, lejos de limitarse a la mera criminalización de la pobreza, se está definiendo como un problema de soberanía político-militar en el que se percibe a las “zonas pobres” como impenetrables por medio de los agentes coercitivos del aparato estatal. Peligrosa constatación que habilita, en muchos casos, la suspensión o la directa conculcación de derechos civiles elementales de los propios sectores vulnerables que se pretende proteger.

En segundo término, el auge de los precios internacionales de los bienes primarios y, en particular, el tema de los biocombustibles, constituyen nuevos contextos en los debates sobre las oportunidades para combatir la pobreza en la región. En este marco se han renovado las pujas por la distribución de recursos que aparecen construidas y debatidas públicamente, a su vez, en una serie de categorías que resignifican el problema de la pobreza. Así se cuestiona la “sustentabilidad ambiental” y “social” de las nuevas economías o las consecuencias en términos de vulneración de “derechos”, “identidades” y “formas de vida” de estas modalidades de desarrollo. Como en la mayor parte de los demás tópicos observados, estos debates comunes muestran significativas diferencias de tratamiento mediático en los diversos contextos nacionales vinculadas a intereses y preocupaciones de carácter local.

Finalmente, nos interesa subrayar un aspecto alentador que puede advertirse en el análisis realizado. Un rasgo general de la prensa de la región es que una parte significativa de la cuestión social de la pobreza se dirime ante la opinión pública en nuevos marcos de referencia, más amplios, que narran el problema en el lenguaje de los derechos individuales, sociales, colectivos, comunitarios, o en los términos de la tensión entre desarrollo y sustentabilidad medio-ambiental y cultural. Se mezclan así preguntas por el medio ambiente, el cambio climático, el respeto de entornos ecológicos de poblaciones y las identidades comunitarias legítimas. Se discuten reclamos de justicia

distributiva –en la arena local y en la global–, en torno a cómo se asignan costos sociales y ambientales entre nuevos sujetos definidos a partir de identidades socioeconómicas, colectivas, regionales o etnoculturales.

Si en la década del noventa la pobreza se trató en los medios de manera excluyente como un problema de adaptación a las reformas estructurales y mediante políticas compensatorias, el panorama en la primera década del nuevo siglo parece presentar un escenario más diverso. Se constata un proceso de politización del fenómeno en los medios de la región en los que se refleja una discusión que contempla tanto la elaboración de nuevas propuestas –los debates acerca de los pactos sociales para superar el problema en Perú, México y Argentina– como la incorporación, aún incipiente, de la palabra de nuevos actores sociales de base territorial, étnica y/o comunitaria, como los movimientos sociales en México, Bolivia y Brasil.

En las postrimerías del siglo pasado el problema de la pobreza aparecía en los medios como la cuestión de compensar o atenuar los rigores del mercado; nuestra investigación invita a pensar que en el nuevo siglo la superación de la pobreza se remite cada vez más a la inquietud por ampliar las fronteras de la democracia.



Apéndice: metodología y características de la muestra

Los métodos

En la investigación se han combinado técnicas cuantitativas –procedimientos estadísticos descriptivos– y cualitativas –análisis enunciativo y modal del discurso–, dentro de una concepción metodológica general que consiste en reconstruir las narrativas de la pobreza que se registran en los medios de los distintos países atendiendo a sus relaciones e implicancias regionales.

En cuanto al tratamiento cualitativo, los textos se han trabajado desde una perspectiva sociosemiótica que los coloca permanentemente en relación con sus condiciones sociales de producción y reconocimiento. La tarea analítica consiste, precisamente, en describir y evaluar la red de relaciones materiales y simbólicas que resultan de la vinculación entre las huellas del texto y las condiciones interaccionales y sociales de su producción. En definitiva, analizar el modo en que las prácticas discursivas de y en los medios relevados contribuyen a la formación, reproducción y transformación de las estructuras sociales, económicas y políticas que configuran el fenómeno de la pobreza.

La consideración de las fuentes como estructuras narrativas nos permitió reconstruir la trama de la pobreza en tanto fenómeno desplegado en diversas temporalidades –política, económica, social, cultural– y configurado por la intervención de agentes autorizados que definen los tópicos con base en los cuales se organiza el relato.

Una bibliografía básica de referencia acerca del enfoque metodológico utilizado es la siguiente:

- Bourdieu, Pierre (1999): *¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos*, Madrid, Akal.
- Fairclough, Norman (1998): *Discurso y cambio social*, Buenos Aires, Cua-

ernos de Sociolingüística y Lingüística Crítica (Facultad de Filosofía y Letras – UBA).

- García Negroni, M. M. (1988): “La destinación en el discurso político: una categoría múltiple”, *Lenguaje en Contexto*, Buenos Aires, 1988.
- Pérez, Germán J. (2004): “Entre el poder del discurso y el discurso del poder. Aproximaciones teóricas y metodológicas al estudio del discurso político”, en Ana Lía Kornblit (comp.): *Metodologías cualitativas en ciencias sociales*, Buenos Aires, Biblos.
- Ricoeur, Paul (1999): “Para una teoría del discurso narrativo”, en *Historia y narratividad*, Barcelona, Paidós.
- Van Dijk, Teun (1980): *La noticia como discurso*, Barcelona, Paidós.
- Verón, Eliseo (1988): “La palabra adversativa” en VV. AA. *El discurso político: lenguajes y acontecimientos*, Buenos Aires, Hachette.
- Verón, Eliseo (1995): *Semiosis de lo ideológico y del poder*, Buenos Aires, CBC-UBA.
- White, Hyden (1992): “El valor de la narrativa en la representación de la realidad”, en *El contenido de la forma: Narrativa, discurso y representación histórica*, Barcelona, Paidós.

La muestra

La definición del universo de análisis, la recolección y el procesamiento del corpus de materiales estuvo a cargo de Global News Group.

El recorte de los materiales de prensa seleccionados se elaboró respetando la siguiente pauta por país:

-Dos diarios de circulación nacional, y

-Uno especializado en temas económicos o en su reemplazo un periódico cuya sección económica fuera representativa.

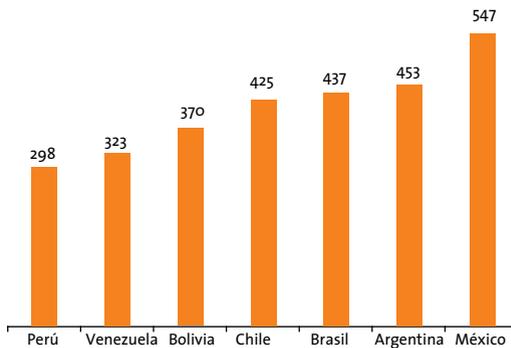
De ello resultó el universo de 21 diarios de los siete países. De cada uno de estos diarios se recolectaron las notas, publicadas entre abril y septiembre de 2007, por medio de ciertos criterios semánticos (o de producción de sentido) a partir de los cuales se elaboró un diccionario de palabras claves que aluden a dimensiones económicas, sociales, culturales y/o políticas de la pobreza. Las palabras clave utilizadas fueron: agua segura, deserción escolar,

desnutrición, indigencia, miseria, necesidades básicas insatisfechas (NBI), pauperismo, pauperización, pobreza, pobres, vivienda precaria, déficit habitacional, sin tierra/sem terra.

La totalidad de notas recolectadas y posteriormente procesadas por este estudio fue de 2853.

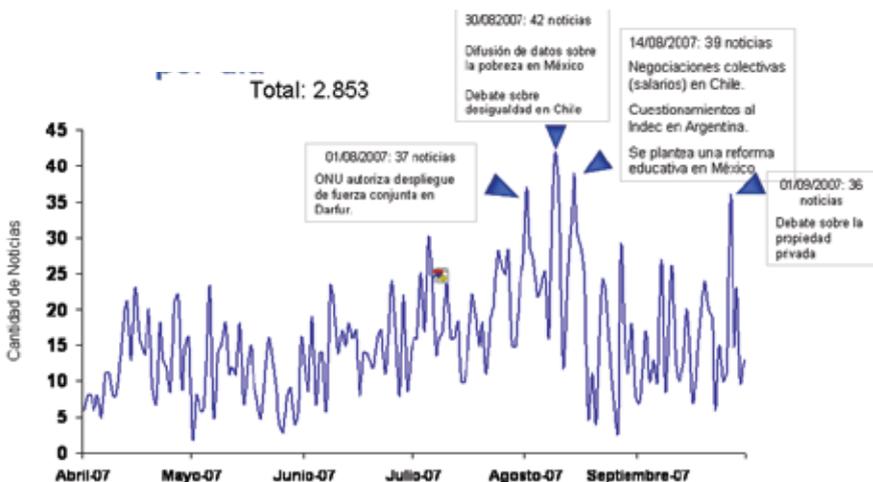
Las siguientes tablas muestran algunos de los principales rasgos cuantitativos de la muestra.

Cantidad de noticias por país

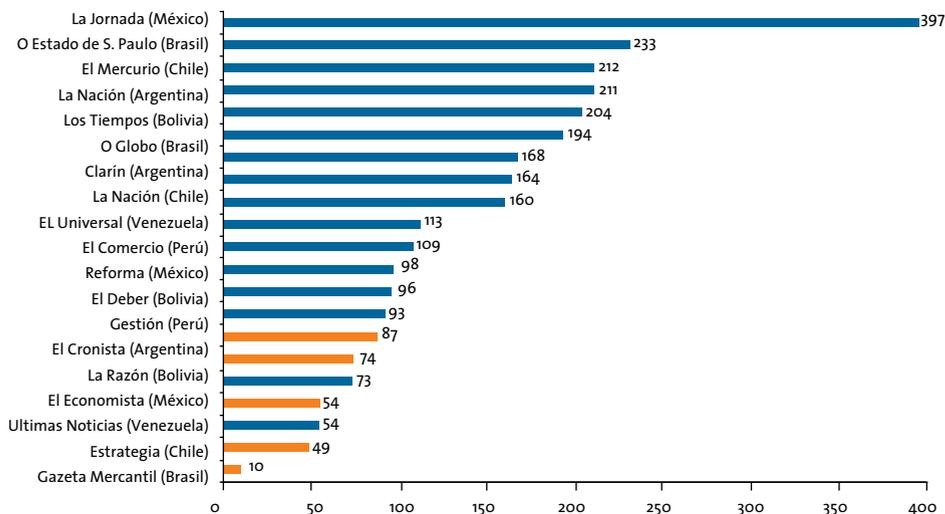


Tema	Cantidad de Notas	% Volumen total (*)
Pobreza	2853	0.68%
Un banco internacional	1034	0.25%
Una empresa de zapatos internacional	1318	0.31%

Cantidad de noticias por día

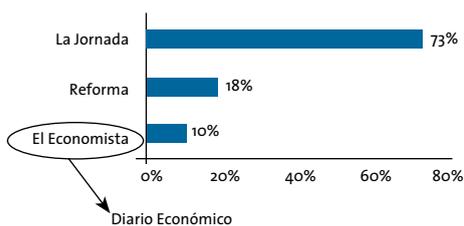


Cantidad de noticias por medio

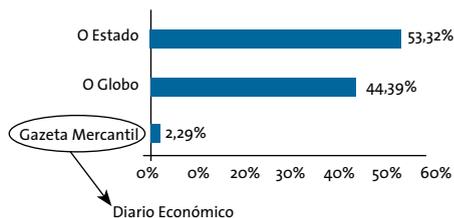


Noticias por medio - por país (análisis sobre 21 diarios de 7 países)

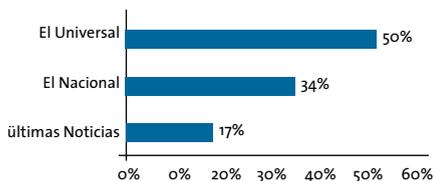
México



Brasil

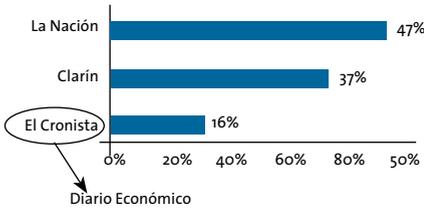


Venezuela

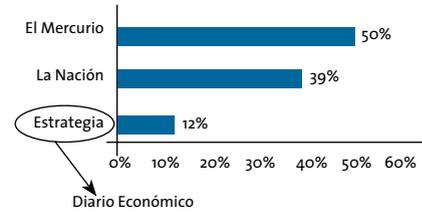


Un caso atípico respecto de esta recurrencia es Venezuela ya que El Universal tiene una importante sección dedicada a temas económicos.

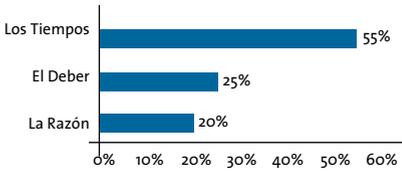
Argentina



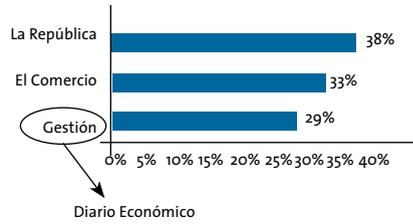
Chile



Bolivia

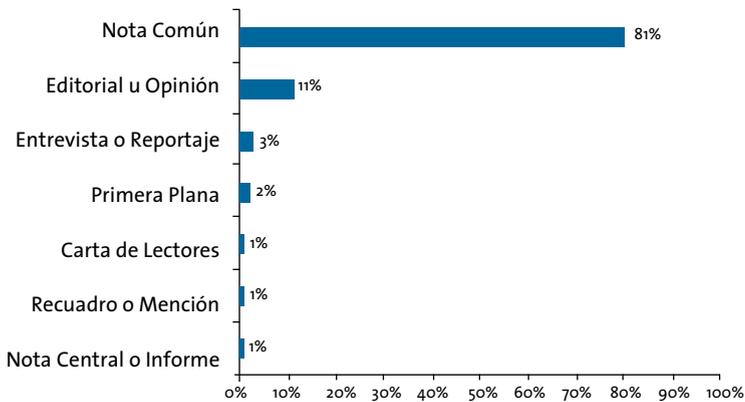


Perú

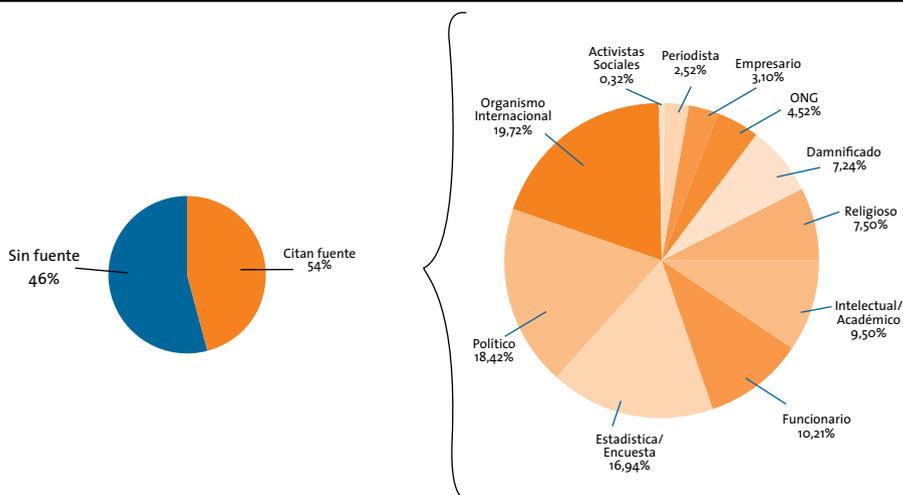


Perú también, en parte, se escapa parcialmente de la tendencia.

Género



Fuentes



Los organismos internacionales son principal fuente de consulta de estadísticas y estudios, los políticos ocupan el segundo lugar fundamentalmente desde el espacio opositor.

Fuentes por país

	Argentina	Bolivia	Brazil	Chile	México	Perú	Venezuela	Total
Sin fuente	49,45%	63,51%	27,23%	60,00%	35,10%	46,64%	43,96%	45,78%
Organismo Internacional	6,62%	13,24%	14,42%	9,18%	12,43%	7,38%	10,53%	10,69%
Político	6,18%	8,11%	15,33%	12,24%	7,50%	7,05%	14,24%	9,99%
Estadística/Encuesta	16,34%	3,24%	8,47%	10,82%	7,13%	12,08%	5,57%	9,18%
Funcionario	2,21%	0,54%	7,78%	0,47%	11,52%	13,76%	1,86%	5,54%
Intelectual/Académico	5,08%	1,08%	8,01%	2,35%	8,59%	4,36%	4,64%	5,15%
Religioso	5,74%	5,14%	2,52%	2,82%	5,30%	1,34%	4,64%	4,07%
Damnificado	3,75%	3,51%	5,03%	1,88%	1,46%	1,68%	12,07%	3,93%
ONG	1,99%	1,08%	6,86%	0,24%	4,02%	0,67%	0,62%	2,45%
Empresarios	1,55%	0,00%	0,23%	0,00%	4,02%	4,70%	1,24%	1,68%
Periodista	1,10%	0,54%	4,12%	0,00%	2,19%	0,00%	0,62%	1,37%
Activistas Sociales	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,73%	0,34%	0,00%	0,18%

— Máximos

— Mínimos (< de o)

Mayor participación de los políticos en Brasil, Chile y Venezuela. Los Organismos Internacionales conforman el referente más publicado.

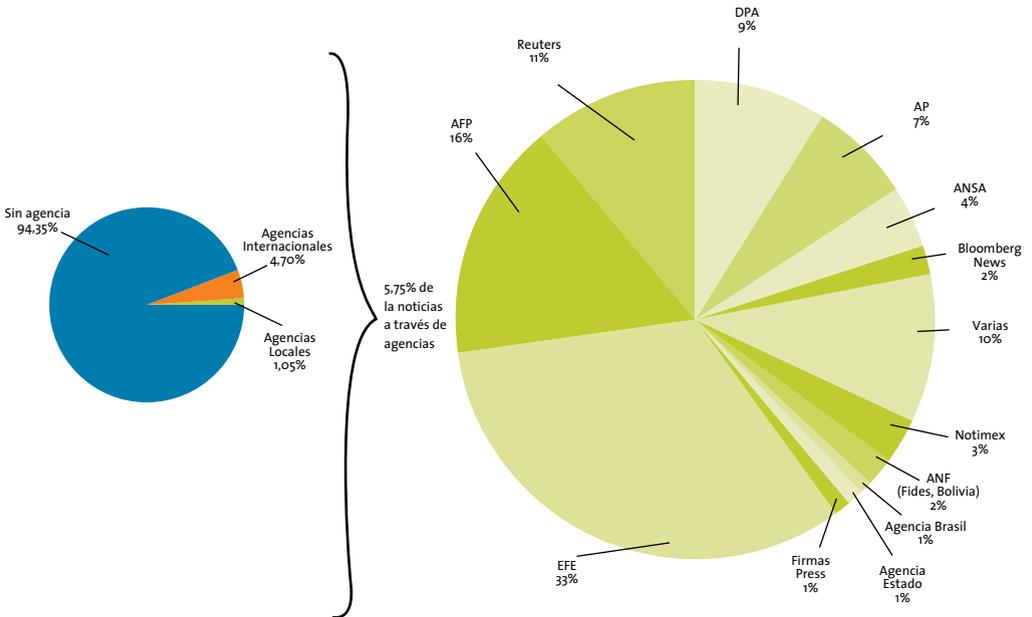
Ámbito geográfico

	Argentina	Bolivia	Brazil
Argentina	65,09%	22,83%	12,07%
Bolivia	59,63%	26,61%	13,76%
Brasil	54,98%	16,17%	28,86%
Chile	75,57%	14,66%	9,77%
México	64,78%	25,37%	9,85%
Perú	93,02%	4,26%	2,71%
Venezuela	55,68%	27,11%	17,22%
Total	66,05%	19,96%	13,99%

— Máximos — Mínimos (< de o)

El tratamiento de la temática es principalmente local.

Tipo de agencia



Las agencias locales no parecen ser las generadoras de la temática dentro de su país.

